

DÍNAMO

Lunes 09 de mayo de 2016 · Nº 1



Ilustración: Ramiro Alonso

La izquierda latinoamericana y sus encrucijadas

En remojo

· PRESENTACIÓN ·

A pedalear

Cuando salió *la diaria*, Uruguay y varios países más de América Latina vivían los comienzos de un período de gobiernos definidos como progresistas, que hoy tendemos a llamar “un ciclo” porque, contra las expectativas de muchos, no llegaron para quedarse por tiempo indefinido, sino que sufrieron en los últimos tiempos derrotas electorales o afrontan crisis diversas. Ya no se sostienen las concepciones de la historia como un proceso inevitable y ascendente hacia el socialismo, empujado por el desarrollo de las fuerzas productivas y con un sujeto único y predeterminado. Pero tampoco ha demostrado validez alguna el sueño neoliberal de alcanzar el fin de la historia con este capitalismo globalizado.

A eso se suma cierto malestar con respecto a la resultante del desempeño de estos gobiernos progresistas, no por la ausencia de logros en numerosas áreas (por ejemplo, la pobreza y la indigencia se redujeron sustantivamente, mientras crecían las economías, el empleo, el salario real y las políticas sociales), sino porque estos parecen, en algunos casos, más fácilmente reversibles que lo que se pensaba, y en general se han visto acompañados por ausencia de cambios o avances en algunos terrenos cruciales, e incluso por la consolidación, en otros, de políticas, criterios institucionales o planteamientos ideológicos que no corresponden a lo que se puede llamar progresismo. No se trata sólo de las consecuencias de la crisis del capitalismo central desde 2008: hubo también, sin duda, entre otros factores, limitaciones del proyecto “progresista”, errores de las formaciones políticas que lo impulsaron, insuficiencias de los movimientos sociales y aprendizajes de la derecha.

Al mismo tiempo, y probablemente debido a las circunstancias antedichas, venimos percibiendo en nuestros lectores una creciente avidez por el debate de ideas. Por ejemplo, una columna del economista Fernando Isabella que publicamos en la última *anuario* disparó un fructífero intercambio sobre el crecimiento económico y la redistribución, que involucró a economistas, politólogos y dirigentes políticos. Tenemos pistas anteriores y posteriores que validan la importancia de promover estas discusiones, en temas tan diversos como las políticas universitarias de extensión, el rol del Estado, los reclamos feministas y el proyecto que modifica la Ley de Derechos de Autor, por mencionar algunos.

En el cruce de esas coordenadas surgió la propuesta de lanzar un suplemento mensual dedicado a la reflexión política sobre estos tiempos, los que probablemente vendrán y también los que queremos que vengan (porque aceptamos la incertidumbre, pero no renunciamos a elegir un rumbo). Sin revisar y refundar proyectos a largo plazo, es difícil evaluar avances y retrocesos: hace falta saldar cuentas con las experiencias de los siglos XIX y XX, pero también estudiar los procesos presentes, pensar el siglo XXI.

Nos parecen tareas tan difíciles como indispensables. Para encararlas, convocamos a un conjunto de personas con las que hemos comprobado, a lo largo de los años, que compartimos cierta manera de mirar el mundo, con matices que se enriquecen mutuamente.

Cuando llegó el momento -siempre complejo- de ponerle nombre a esta iniciativa, las primeras propuestas giraron en torno a nociones de crítica y resistencia. Luego nos fuimos dando cuenta de que, siendo tan necesario como siempre desarrollar el pensamiento crítico -que vive una situación de crisis desde hace varias décadas-, y habiendo mucho a lo que resistirse, no nos conformaba identificar estas páginas solamente con la expresión de quejas, rechazos o condenas. Por el contrario, quisimos enfatizar la voluntad de aprender de la experiencia para abrir perspectivas y poner en movimiento proyectos.

Esto no es una charla de velorio, al comienzo de un período de duelo. No es apenas el balance dolido de un final de ciclo, ni un mero intento de asignar culpas a otros para sentirnos ajenos a los reveses. Nos sentimos parte de los problemas y queremos ser parte de sus soluciones. Por eso elegimos el nombre de un generador, pero no pensamos en una represa hidroeléctrica, y mucho menos en una planta nuclear, sino en un modesto dínamo, acorde con nuestra voluntad de viajar livianos y ser autosustentables. Quizás ayude a encontrar nuestro camino, ahora que oscurece y pedaleamos cuesta arriba. ■

La historia sin fin



El pueblo ya no está más en las calles. En su lugar irrumpió la gente, una abstracción tan concreta que es capaz de desestabilizar gobiernos, una entidad con voceros. Sus voceros son “los medios de comunicación”, erigidos y autodenominados representantes de la entidad, y que desde ese rol denuncian, demandan, juzgan. Todo esto no es verdad, y, sin embargo, parece que lo es.

Tanto en Brasil como en Uruguay y Argentina, los medios de comunicación masivos pertenecen en su gran mayoría a pocas familias con intereses políticos y/o económicos, pertenecientes a determinada clase

social. Tienen parentescos biológicos y económicos con los principales grupos empresariales de sus países, por lo tanto, no es de extrañar que el concierto suene afinado. La “gente”, entidad corporizable por medio de encuestas de opinión pública -en algunos casos de discutible metodología-, parecería marcar los temas de agenda y tomar decisiones con mayor legitimidad que la población cuando utiliza los mecanismos pautados por la democracia representativa, en otras palabras, el voto.

Medios, encuestas de opinión pública, medios que comentan las en-

cuestas de opinión pública. Proliferan los intermediarios, las interpretaciones. El desprecio o rechazo de determinados sectores sociales por los partidos de izquierda y lo que estos representan se convierte de súbito en el rechazo de la mayoría, y cuesta trazar la genealogía que llevó al estado actual de cosas.

En esa encrucijada, los partidos de izquierda no aciertan a entender las nuevas lógicas, y oscilan entre diatribas furibundas contra los grandes grupos mediáticos, reformas legales tibias o no implementadas para “democratizar” los medios, la confusión entre comunicación institucional y periodismo, el enfoque moralizante de las buenas o malas noticias, el ensayo de alternativas panfletarias, o la simple resignación.

En Brasil, los principales diarios publicaron el 29 de marzo un aviso con fondo amarillo y letras blancas que reclamaba “*Impeachment já!*”. No tenía firma. Algunos diarios creyeron que era suficiente aclarar, varias páginas después, que se trataba de un aviso pagado por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo. Otros, ni eso. El relato de la escalada de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) sólo podía tener un final: la destitución de la presidenta. Dilma Rousseff y el PT denunciaron una campaña mediática en su contra. Pero el *impeachment* sigue su curso. En Brasil, los medios de comunicación tienen una credibilidad mucho mayor que el sistema político.

En Argentina, el grupo Clarín se transformó en el principal opositor al gobierno de Cristina Fernández, que se aprestó a dar la batalla desde el inicio contra la concentración mediática. Fueron años de confrontación. Fernández perdió las últimas elecciones. Los medios argentinos pudieron al fin, sin pudor, publicar fotos del prototipo de familia exitosa de telenovela: Mauricio Macri, Juliana, la “hechicera” que lo conquistó, y la hija de ambos, el “sol” que casi lesiona a su papá luego de tiernos juegos.

Los medios construyen narrativas. Las historias nos gustan a todos, y los medios tienen el poder de contarlas. La izquierda se enoja con los medios, pero no los entiende. Una excepción a destacar es la del ex presidente José Mujica, que llevó hasta Japón el relato de su trayectoria política. La del ex guerrillero, la del viejo austero y desprendido, que dice lo que piensa, que vive como piensa. Es una historia posible entre muchas, claro, pero probó ser más efectiva que mil abstracciones.

Está bien que la izquierda se preocupe por las vías a través de las cuales difundirá sus relatos. Pero sobre todo debe preguntarse qué relatos está pensando en construir. ¿Cómo empieza la historia, quiénes son sus protagonistas principales, qué rasgos hay que resaltar de ellos? ¿Cuál es el punto de quiebre? Y lo más importante de todo: ¿con qué imagen, con qué ejemplo o con qué sueño será capaz de conmovernos? ■

Natalia Uval

Con el apoyo de:



Redactor responsable: Lucas Silva / Edición y coordinación: Marcelo Pereira, Natalia Uval / Diseño y armado: Martín Tarallo / Edición gráfica: Iván Franco / Ilustraciones: Ramiro Alonso / Corrección: Karina Puga / Textos: Rodrigo Arim, Daniel Chavez, Gabriel Delacoste, Gustavo Gómez, Gabriel Kaplún, Diego León Pérez, Aldo Marchesi, Guillermo Mastrini, Mabel Thwaites Rey, Hilary Wainwright.

Las izquierdas y las políticas públicas

Se ha vuelto un lugar común en los análisis sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe clasificar las experiencias de gobiernos de izquierda en dos grupos o categorías: regímenes de izquierda moderada o "socialdemócrata" y regímenes de izquierda radical o "populista". En el Cono Sur, el primer grupo estaría integrado por Brasil, Chile (bajo la Concertación) y Uruguay; mientras que la segunda categoría la representarían Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el plano de las retóricas discursivas y de la presencia o no de estructuras partidarias de sostén consolidadas en el tiempo, este corte puede contar con bases sólidas. Sin embargo, no refleja diferencias en las políticas económicas y sociales de los años recientes.

Propongo una mirada sumaria sobre las características de las políticas fiscales y monetarias, la inversión pública, los sistemas tributarios y las políticas sociales, de donde emergen patrones de cercanía bastante diferentes de los que emergen con la taxonomía moderado-radical o socialdemócrata-populista con que suele simplificarse la discusión.¹

En el manejo macroeconómico, las diferencias han sido importantes y la clasificación de los regímenes recientes, muy poco útil. Bolivia y Ecuador han mantenido una importante disciplina fiscal y monetaria, consolidando un equilibrio de las cuentas públicas. Ecuador definió por ley una regla presupuestal que evita financiar gastos corrientes con ingresos contingentes y reserva los ingresos extraordinarios -provenientes fundamentalmente del petróleo- para financiar inversión pública. Uruguay se encuentra en una situación similar, con un déficit fiscal manejable, pero con dificultades para consolidar resultados agregados adecuados ante un enlentecimiento importante de actividad. Brasil, cuya situación fiscal se fue deteriorando, no fue capaz de implementar medidas capaces de revertirla, con un déficit actual de casi 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Venezuela presenta desequilibrios macroeconómicos múltiples y críticos. Argentina fue comprometida adicionalmente por la opacidad en el manejo de la información sobre las estadísticas públicas.

No obstante, las debilidades estructurales de la región, fundamentalmente asociadas a la estructura productiva y su patrón de comercio exterior, configuran un escenario de fuerte vulnerabilidad, donde la desaceleración del crecimiento y la caída de los términos de intercambio producen deterioros de las cuentas públicas. Déficit y acumulación de deuda es una consecuencia natural de las políticas anticíclicas. El problema es su magnitud y el "pulmón" de los Estados para sostener la actividad económica.

Una situación fiscal delicada es un problema político, no sólo económico: condiciona la capacidad para intervenir ante situaciones adversas, puesto que un mayor incremento del déficit que arroje dudas sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas acota los horizontes de planificación, impone riesgos sistémicos y desplaza la agenda de políticas desde los cambios hacia la gestión de los desequilibrios inflacionarios y de las cuentas públicas que eviten la emergencia de crisis económicas y sociales.

Nuevamente, Bolivia es un caso paradigmático en sentido inverso y poco señalado en el debate público. Alcan-

zó un superávit fiscal persistente entre 2006 y 2014, y ahora es capaz de utilizar la inversión pública para contrarrestar la reversión del ciclo. Dani Rodrik, economista especializado en temas de desarrollo, señala a Bolivia como ejemplo de que la inversión pública adquiere preponderancia como palanca para el desarrollo. El manejo fiscal y la decisión política de expandir los gastos de capital del Estado (que treparon de 3% a 15% en la era Morales) le permiten a Bolivia ser uno de los pocos países que lograron preservar el crecimiento económico (4% en 2015, de los mayores de la región) al revertirse el ciclo. Un incremento similar de la inversión pública registra Ecuador. Manejos fiscales adecuados permitieron ubicar al Estado como motor central de la economía con un fuerte cambio estructural en el comportamiento de la inversión pública, valor caro para la izquierda. Los efectos sobre el desarrollo económico de largo plazo, que dependerán de la calidad de la inversión, no sólo de su magnitud, recién se percibirán en unos años.

Las cuentas públicas no son neutras. La forma en que el Estado recauda recursos y asigna gastos es un componente de identidad política de la izquierda. Así, los sistemas tributarios son mecanismos redistributivos por excelencia, a la vez que definen estructuras de incentivos específicas para la asignación de recursos. Argentina, Brasil y Uruguay cuentan con una importante presión fiscal, por lo que el desafío se centra menos en la recaudación y más en el efecto distributivo global. Las cuentas públicas de Ecuador, Bolivia y Venezuela descansaban fundamentalmente en los ingresos provenientes de la minería, con una debilidad estructural del Estado para recaudar impuestos. El desafío era reducir la dependencia de la financiación pública de las actividades extractivas, una agenda que los gobiernos anteriores se negaron a recorrer.

Mientras que Uruguay incorpora una reforma tributaria general con un sesgo progresivo, en Argentina y Brasil no se encuentran reformas estructurales parecidas, con excepción de las retenciones a las exportaciones, fácilmente revertibles. Ecuador y Bolivia introdujeron reformas de porte que incrementaron la recaudación tributaria: de menos de 15% del PIB a comienzos del siglo a cerca de 20% en 2015. Estas reformas alcanzan mayores niveles de recaudación y son progresivas, aunque su efecto redistributivo es acotado.

Hay clara priorización del gasto social; en particular, del gasto en salud, educación y protección social. La diferencia radica en las características de los programas y su grado de institucionalización. Venezuela hizo descansar buena parte de las políticas sociales en aparatos paraestatales, asociados a la fuerza política en el gobierno. En Argentina se observa una situación intermedia, con programas altamente institucionalizados -educación, salud, seguridad social contributiva, asignaciones familiares- y otros administrados directamente por organizaciones sociales. Uruguay y Brasil registran niveles altos de institucionalización: el Estado administra la totalidad de los programas relevantes.

La distribución del gasto no es sinónimo de logros. Su calidad, entendida como eficiencia en el diseño de programas adecuados a los objetivos, es

Rodrigo Arim es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Doctorado en Economía (programa conjunto de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Chile y el Instituto Tecnológico de México).

un tema central. Juzgar esta dimensión es complejo, y aún es temprano para hacerlo. El mayor gasto educativo puede traducirse en cambios de paradigmas o en saltos discretos que mejoren acceso y calidad en cada nivel de enseñanza, pero sus efectos sobre la estructura productiva -no existe cambio en la matriz productiva sin un fuerte incremento del potencial creativo y productivo de los ciudadanos- y el bienestar comenzarán a visualizarse en algunos años.

Políticas de transferencias, reformas tributarias y reformas laborales explican una parte importante de la caída reciente de la desigualdad. Otra parte se debe a condiciones específicas provenientes del mercado: la producción de bienes primarios, que impulsaron el crecimiento, son intensivos en trabajo no calificado, lo que se traduce en un incremento más que proporcional de los salarios percibidos por lo tramos inferiores de la distribución salarial. Sin embargo, es importante reconocer que la política se encuentra detrás de la reducción de la desigualdad, en una región que no logró mejoras significativas en este plano en la última mitad del siglo XX.

Una agenda para el futuro

La institucionalización de los cambios de las políticas públicas es lo que puede dar cuenta de su permanencia o transitoriedad. Reglas de juego conocidas, en las que el acceso a los beneficios de las políticas públicas es anónimo y no depende de vínculos paraestatales o redes de influencia, brindan estabilidad a las políticas; de lo contrario, cambios en la composición del núcleo de poder revierten cualquier reforma. Generar nuevas reglas de juego -eso son las instituciones- y dotarlas de estabilidad ante cambios políticos es una señal de identidad de la profundidad de los cambios.

Elevar el problema del manejo macroeconómico a un nivel de principios es un error. Es un instrumento, aunque clave para habilitar una agenda de cambios profundos y duraderos. Despreciar su importancia instrumental conlleva retrocesos sistemáticos: provoca que la veleta de la política vuelva sobre el problema de la estabilización y se desplacen al cambio estructural y la igualdad.

El crecimiento económico es un ingrediente clave del desarrollo, sin el cual los canales para promover el bienestar social se acotan profundamente. La imagen de un Estado bucólico donde se distribuyen los activos igualitariamente se parece a algunas de las utopías socialistas del siglo XIX, pero, como el propio Karl Marx observaba, estas carecían de bases materiales y sociales. La economía capitalista tal como la conocemos es inviable, no en el largo plazo, sino para las próximas generaciones. Pero la emergencia de la agenda medioambiental no es una alerta contra el crecimiento, sino contra este tipo de crecimiento. No existirá crecimiento salvo que el Estado muestre su musculatura para dirigir el proceso de acumulación y el cambio tecnológico. La respuesta está en la política: el interés privado debe ser subsumido a la necesidad pública.

La agenda de la igualdad y el cambio productivo deben ser las señales de identidad distintivas de una política de izquierda. Un acceso equitativo a los activos productivos y humanos es un requisito para avanzar en equidad; como lo es también el fomento de cambios en el entramado productivo que generalicen el acceso a puestos de trabajo más productivos.

Algunos sectores progresistas visualizan los cambios realizados en los sistemas tributarios como un punto de llegada, como un nuevo *statu quo* que no requiere más elaboración. No hay ni teoría económica ni evidencia empírica que sostengan esta postura. En la región más desigual del mundo, donde 1% de la población más rica se apropia entre 14% (Uruguay) y 20% (Colombia) del total del ingreso nacional, el sesgo distributivo de la tributación debe aumentar su incidencia sobre la riqueza (impuestos al patrimonio y a las herencias) y el tramo superior de la distribución. Las buenas noticias provienen de afuera: hay una creciente masa crítica a nivel académico que propugna reincorporar esta dimensión en la discusión de las políticas públicas.²

En otros casos, las áreas de acción se complejizan por el propio vínculo que la izquierda tiene con distintos sectores que operan en la arena política. La educación y la seguridad social son dos ejemplos. Introducir cambios radicales que impulsen el acceso a los dispositivos de protección social a lo largo de la vida y a la educación desde una perspectiva universalista, y mejoren su calidad, se encuentra en el corazón programático de la izquierda. Hacerlo viable no es sencillo y las coaliciones que restringen o bloquean cambios no son sólo externas.

Los gobiernos de izquierda han mostrado mayores debilidades en los esfuerzos para transformar la estructura productiva, que continúa dependiendo marcadamente de bienes primarios que determinan una inserción internacional vulnerable. Cambios en esta dimensión no son sencillos. No es un problema de "voluntad política". Requieren el fomento a la innovación y el cambio tecnológico, procesos para los que la política pública debe generar incentivos claros. Pero también se precisa una apuesta decidida a la educación de calidad. Los avances en esta dimensión no son muy alentadores -quizá la excepción sea Ecuador-, y, sin una alteración decidida en este plano, el cambio en la estructura productiva es una quimera.

Es probable que los efectos de estas políticas no sean transitorios. Los cambios en la protección social o las reformas tributarias han provocado efectos tangibles en términos de equidad y asegurado el acceso a ciertos estándares mínimos de vida a significativos sectores de la sociedad. Sin embargo, la agenda no puede asociarse simplemente a conservar lo logrado. La izquierda en la región requiere una discusión programática profunda, que ubique e identifique, con claridad y sin dogmatismos, dónde se encuentran las claves para promover el desarrollo sustentable y la igualdad. ■

Rodrigo Arim

1. Áreas relevantes no incluidas son las políticas laborales y las políticas de innovación y tecnología.

2. El libro de Anthony Atkinson *Inequality*, de 2015, es un excelente ejemplo.

“Hay que empezar de nuevo”

Entrevista con Boaventura de Sousa Santos

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y docente en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y en la de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Su trabajo busca producir un conocimiento que respete e incorpore los creados en las luchas populares y les sea útil. Ha escrito sobre América Latina, los problemas de la izquierda contemporánea y los procesos constituyentes y es un referente del Foro Social Mundial y de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. El 16 de abril dictó una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, ocasión que se aprovechó para hacer esta entrevista.

-¿Cómo ves la situación en Brasil después de la votación del juicio político a Dilma Rousseff?

-En el momento en que te hablo no sabemos qué va a pasar, pero de todos modos me parece que va a haber un período bastante turbulento políticamente. El *impeachment* es claramente un acto que configura un golpe parlamentario, sobre todo porque no se han demostrado los presuntos “crímenes de responsabilidad” que lo justificarían. Pero también por razones políticas, en la medida en que quizá la presidenta Dilma Rousseff es la política menos corrupta de América Latina y va a ser impedida por un conjunto de los más corruptos de América Latina. Eso es grave para la democracia de Brasil y es grave para el continente. Entonces, me parece que lo que está en juego en este momento es una normalidad democrática.

Si se da el *impeachment*, va a tener algunas consecuencias. Obviamente, la polarización social en Brasil en este momento es muy alta, y pienso que ni los movimientos sociales, ni los ciudadanos, ni las clases populares van a aceptar este acto, sobre todo porque de él resultaría un gobierno liderado por un partido [el Partido del Movimiento Democrático Brasileño] que es conocido por ser uno de los más corruptos de la historia de Brasil. Y, por otro lado, porque probablemente el fenómeno más importante que está por detrás de todo esto es la operación *lava jato*, o sea, la gran investigación contra la corrupción, que quizá vaya a ser cancelada, ya que, según todos los indicios que tenemos, hay mucha gente involucrada en la corrupción que pertenece precisamente a ese partido que va a estar en el poder.

Todo esto crea un problema de legitimidad democrática difícil de manejar y cuyas consecuencias son difíciles de prever. Pero el impacto de lo que va a pasar será muy importante para toda la región, porque si el *impeachment* sale, será una afirmación de que las democracias que existen en el continente son fácilmente manipulables y de que si alguien gana las elecciones y obtiene, por tanto, el derecho de gobernar, cuando importantes fuerzas antidemocráticas deciden que no debe gobernar, tiene maneras de lograrlo por medio de una conjunción de medios: un Poder Judicial conservador, que está al servicio de esas fuerzas antidemocráticas, y fuerzas externas, que en este caso pienso que son del imperialismo estadounidense y que realmente no están interesadas en que continúe en Brasil un proceso que, si bien no es anticapitalista (Dilma no es anticapitalista; obviamente hay muchas críticas a su gobierno por no cumplir con el programa que propuso realizar cuando fue

elegida), es posneoliberal, en el sentido de que tiene empresas públicas importantes nacionalizadas, como Petrobras, y recursos naturales importantes fuera del mercado internacional.

-El propio Partido de los Trabajadores, antes de este proceso de *impeachment*, ya había llevado adelante una política basada en exportaciones extractivistas y ya había fortalecido a las fuerzas policiales que ahora son parte de las fuerzas conservadoras. ¿Qué queda de todo esto, cuando muchas de las fuerzas que están conspirando fueron desatadas por el propio gobierno?

-Es verdad que, a lo largo de estos años, estos gobiernos populares latinoamericanos, muchos de ellos salidos de movimientos sociales, cometieron numerosos errores.

¿Cuáles fueron los errores en el caso de Brasil? A mi juicio -y esto también puede aplicarse a otros gobiernos, como el de Cristina Fernández, en Argentina-, lo que ocurrió fue que aprovecharon una coyuntura completamente excepcional, que es lo que llamamos el consenso de los *commodities*, es decir que, debido al impulso del desarrollo de China, los precios de las materias primas subieron y permitieron ganancias importantes a estos países. Los gobiernos populares decidieron entonces profundizar el modelo de desarrollo extractivista, con el objetivo de sacar algo de la renta resultante de esa alza de precios para hacer algo de redistribución social. O sea, no cambiaron el modelo económico: permitieron que los ricos y las oligarquías se siguieran enriqueciendo. Los bancos, por ejemplo, nunca ganaron tanta plata en Brasil como en los tiempos de [Luiz Inácio] Lula [da Silva], pero, como los precios eran altos, quedaba un excedente significativo para hacer una redistribución sin precedentes. Por medio de mecanismos como bonos, becas familia y otras políticas sociales, se logró que más de 45 millones de personas salieran de la pobreza, lo que es un hecho político importante. Pero no era el socialismo, porque dependía totalmente de los precios internacionales, en cuya formación Brasil no incide de ninguna manera.

Por eso, por aceptar ese modelo de desarrollo, aceptaron también el modelo político que venía detrás, y que viene de muy atrás. Ese modelo político es el colonial. Hay una continuidad enorme con el modelo colonial, que se había interrumpido en algunos países con la industrialización y la sustitución de importaciones. Durante estos gobiernos populares no hubo cambios en el sistema político, ni en el sistema de los medios de comunicación, ni en el sistema fiscal, y eso fue lo que acabó

por llevar a que estos partidos quedaran atrapados en el mismo proceso de gobierno que las oligarquías y las derechas tradicionales, que siempre han utilizado la corrupción, que siempre han utilizado los medios, que siempre han utilizado ilegalidades para poder consolidar su poder. Y hubo aquí una tentación: quizá, si se dejaba a los ricos ser aun más ricos, ellos iban a permitir que el país cambiara lentamente en términos sociales. El problema es que el consenso de los *commodities* duró hasta que los precios bajaron por la crisis de China, y desde entonces dejó de haber plata para poder garantizar las políticas públicas.

En el momento en que la plata escaseó, ¿qué podía hacer el gobierno? Sólo había una solución real, y era una política fiscal distinta: que los ricos pagaran más impuestos. Pero, como no se cambió el sistema político, eso está totalmente prohibido. Y, por lo tanto, el mismo gobierno empezó a hacer dos cosas: por un lado, profundizar aun más el agronegocio, la frontera agrícola, la frontera minera, lo que contri-

“Es verdad que el progresismo fue hecho con las maneras antiguas de hacer política, y por eso los resultados están ahí. Y facilitaron realmente la entrada de la derecha”.

buyó al despojo de las poblaciones, a la contaminación del agua, a la crisis ambiental, en complicidades extrañas con los ejércitos privados que existen, con organizaciones paramilitares que matan a los indígenas y a los líderes campesinos por todo el continente, mientras estos gobiernos miran hacia otro lado. Por eso el ciclo se agotó.

Era una manera de gobernar como siempre se gobernó en América Latina, más a favor de las clases dominantes que de las clases populares, pero, en un contexto favorable, dejando una parte significativa de la riqueza para la redistribución social. Eso dejó de ser posible, se hizo insostenible para estos gobiernos. Por eso la crisis que tiene Brasil es la crisis que tenemos también en Ecuador en este momento, es la crisis que tenemos en Argentina, donde una derecha muy revanchista en pocos meses destruye todos los avances sociales que se habían conquistado en los últimos 12 años. Y por eso hay que empezar de nuevo.

-¿Los gobiernos progresistas no se la hicieron un poquito fácil a la derecha? En este escenario, las fuerzas conservadoras van a volver al poder y se van a encontrar con una Policía militarizada y poderosa en términos materiales y legales, con leyes más represivas, cambios que a la derecha le habrían costado mucho más.

-Comprendo tu pregunta. Los gobiernos progresistas hicieron mucha continuidad con los anteriores, y por eso las rupturas pueden parecer más drásticas de lo que son en realidad. Realmente los líderes indígenas siguieron siendo asesinados en Brasil durante los gobiernos populares, como lo eran antes. Ahora -y aquí hay una división dentro

del pensamiento crítico latinoamericano, dentro del cual estoy por adopción, porque no soy latinoamericano-, yo no voy al punto de considerar que estos gobiernos son gobiernos reaccionarios. Algunos colegas consideran que Evo Morales es un reaccionario. Yo no soy capaz, y te digo “no soy capaz” porque es un límite de mi inteligencia, de mi capacidad analítica. Pero es verdad que el progresismo fue hecho con las maneras antiguas de hacer política, y por eso los resultados están ahí. Y facilitaron realmente la entrada de la derecha. Este fue el gran error que cometieron algunas izquierdas del continente.

Uno de los grandes intelectuales de este continente, Álvaro García Linera, después de los resultados de las últimas elecciones en Bolivia dijo muchas veces que, si la derecha volviera al poder, tendría que reconocer que el centro de la política está desplazado hacia la izquierda, porque las fuerzas de izquierda lograron muchos avances que no se pueden destruir. Dijo que podrían reducirlos, pero siempre a partir de un centro ubicado más a la izquierda que antes. Como tú sabes, no fue eso lo que pasó. Mira a [el presidente de Argentina, Mauricio] Macri. En tres semanas, desapareció casi todo lo que se había hecho en 12 años. La derecha, cuando viene, viene revanchista. Viene con la decisión de eliminar todo lo que fue posible durante estos años, con la idea de que, por un lado, es insostenible y, por otro lado, las clases populares no lo merecen. Son privilegios. Las clases populares tuvieron demasiados privilegios, hay que recortarlos. Y la crisis va a ser la excusa.

Por eso yo creo que estos gobiernos populares han cometido muchos errores: no transformaron el modelo económico, ni el modelo de desarrollo, ni el sistema político. Quizá fueron víctimas de su entusiasmo. Tengo que decir que en el inicio estaba 100% con estos procesos. Participé en la redacción de las constituciones de Bolivia y Ecuador. ¿Cuántas veces cené en casa de [el presidente ecuatoriano] Rafael Correa y acabé cantando canciones revolucionarias, del *Che* Guevara, como si la revolución estuviera próxima? No podía imaginar que años después la alternativa es que, si no tienes inversión estadounidense de despojo, tienes a China, que te cobra de la misma manera y destruye los territorios de la misma manera. Entonces, muchos intelectuales tenemos que hacer una autocrítica también y ser menos arrogantes. Quizás ahora tienes la clave para las epistemologías del sur: ir más despacio, con menos confianza en que las ideas nuevas crean realidades nuevas. No, las realidades nuevas decantan de algunas ideas nuevas, pero no eres tú el que crea las realidades nuevas, es la gente que está en la calle, en la lucha, son ellos quienes están realmente innovando, no eres tú con la teoría.

-Imaginas, entonces un escenario en que las cosas vuelven a la normalidad, Estados Unidos vuelve a mirar a América Latina, los precios de los *commodities* vuelven a estar bajos y el ciclo termina. Has sido una figura protagónica de este ciclo que



Boaventura de Sousa. * FOTO: CECILIA VIDAL

ahora termina. ¿Cómo te imaginas lo que viene? ¿Qué ciclo puede venir ahora? ¿Qué tipo de cosas habría que empezar a pensar en relación con lo que acaba de terminar?

-Pienso que no estamos regresando a lo normal; cuando mucho, vamos a tener una nueva normalidad bastante turbulenta. Va a ser una democracia de fachada, pero cada vez más vaciada; ya no una democracia de baja intensidad, sino una de bajísima intensidad. No podemos pensar esto como la normalidad, sino como el resultado de un fracaso histórico que se debe analizar, de modo de encontrar las fuerzas que hagan posible un nuevo ciclo más duradero, menos frágil, en el que las conquistas sean menos reversibles. No sabemos en qué condiciones va a ocurrir eso, pero, con alguna turbulencia institucional, va a implicar una reforma política, que va a ser quizá demandada en las calles, reivindicada por los movimientos sociales, por las organizaciones sociales. Quizá necesitamos otro ciclo constituyente. Una nueva asamblea constituyente u originaria, digamos, que haga una reforma política fuerte, para que esta democracia pueda defenderse de las fuerzas capitalistas que la secuestraron.

Eso va a exigir, por ejemplo, que de una vez por todas se acepte que en las condiciones actuales del mundo no hay alternativa socialista en la agenda política, que no existe la posibilidad de una política revolucionaria, como hubo en otros tiempos. La democracia es el único instrumento de lucha que nos queda. Esa democracia tiene que ser reinventada, no puede ser apenas la democracia representativa. El nudo central del proceso político es que va a ser necesario articular democracia participativa con democracia representativa. ¿Qué quiero decir?: que los partidos políticos van a dejar de tener el monopolio de la representación política. Las asociaciones, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, reunidos en

asambleas, organizando los barrios, en el campo, en la ciudad, van a tener que encontrar formas de participar, no sólo a nivel de consulta, sino también a nivel de implementación, en algunas o en muchas de las políticas públicas -consejos populares de educación, de salud, de infraestructura-, o sea, una forma de que los ciudadanos, además de elegir representantes, puedan tomar algunas decisiones ellos mismos.

Hay que inventar otras formas políticas que permitan esa articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa. Para que sea eficaz, va a ser necesario que esté presente en los propios partidos. Hay que refundar los partidos existentes o inventar otros partidos de izquierda contruidos con una lógica de base distinta, y esa lógica tiene que incluir la democracia participativa desde el inicio. Tenemos en España a Podemos, que representa esta nueva voluntad política de crear lo que llamamos partidos-movimientos. Articulaciones varias y distintas entre círculos de ciudadanos, asambleas de ciudadanos que deliberan sobre las políticas del partido, que escogen a los candidatos y toman decisiones, que después son asumidas por los liderazgos partidarios. Es una manera totalmente distinta de hacer política, y además es la única que puede impedir que el dinero domine las decisiones político-partidarias y lograr que la corrupción deje de ser endémica.

Hay un campo muy grande para la creatividad democrática. Por eso yo lucho en mi trabajo por lo que llamo las epistemologías del Sur, en el sentido de crear también una reforma en el conocimiento. Porque no pienso que sea posible la justicia social global sin justicia cognitiva global, o sea, una democracia entre diferentes formas de conocimiento. En la raíz de todo el sistema político está el conocimiento académico que controla las universidades y que es eurocéntrico, como la ciencia política, la sociología y la antropología. Son los instrumentos que

produjeron las políticas y las formas de representación política que tenemos. Eso tiene que transformarse, aceptando que hay otras maneras de conocer, que la representación del mundo es mucho más amplia que la representación occidental del mundo. Hay otras formas de transformación social que quizá no se van a llamar socialismo ni comunismo: se van a llamar respeto, dignidad, protección de los territorios, derechos del cuerpo de las mujeres. A esto le llamo una ecología de saberes, que implica también una reforma de la universidad.

“Hay que inventar otras formas políticas que permitan esa articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa”.

Si me preguntas cómo definir este nuevo ciclo en términos progresistas (porque también puede ser una nueva barbarie, todavía peor), diría que tiene que tener una dimensión epistemológica muy fuerte, y que esa revolución epistemológica va a pasar por las universidades. Las universidades van a tener que aceptar que dentro de ellas circulen otras formas de conocimiento. Otras concepciones de vida son posibles, pero en nuestros departamentos de ingeniería, de ciencia, de biología, de física se ríen si hablamos de la Pachamama, de la Madre Naturaleza o de derechos de la Madre Tierra.

-¿Deberíamos recuperar la reflexión sobre la ética en la universidad?

-Creo que sí, pero no una ética según las epistemologías del norte, de ontologías individualistas, como cuando en la ciencia política o en la sociología la unidad fundamental es el individuo. Hay que seguir otras ontologías, para, por ejemplo, rescatar el concepto de comunidad, que se ha perdido en las ciencias sociales.

En toda la construcción de la ciencia social moderna, de [Thomas

Diego León Pérez tiene 26 años y es estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República, **Gabriel Delacoste** tiene 28 años y es docente de teoría política y estudiante de la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de la República.

Hobbes, [John] Locke y [Jacques] Rousseau, de hecho está siempre presente una tensión entre el principio del mercado, el principio del Estado y el principio de la comunidad. La comunidad de toda la vida, de los ciudadanos, de las obligaciones horizontales entre ciudadanos que no son mercantiles: mi cuidado por ti, mi amistad, que te ayude cuando estás en dificultades. Con el tiempo, ese concepto de comunidad desapareció; las universidades y las ciencias sociales lo redujeron a una cosa que no existe, llamada sociedad civil, un concepto que nunca he usado en mi trabajo. Es un conjunto de individuos hostiles a todos los otros individuos. Hoy en día, lo que les dicen todo el día a los estudiantes es: “tienes que ser un emprendedor”; o sea, para que tengas éxito, es necesario que otros fracasen. Tu éxito es perfectamente simétrico con su fracaso. No hay ninguna posibilidad de que todos ganemos. Este sistema es de un individualismo total. Una ética basada en esta idea es la ética de la autonomía, por ejemplo. Tenemos que ser autónomos. Pero ¿cómo puedes ser autónomo si no tienes condiciones para serlo? ¿Qué es eso de que el emprendedurismo quiere decir trabajar sin derechos y tal vez sin plata durante mucho tiempo? No es eso lo que queremos. Necesitamos buscar otra ética, con otras ontologías.

Las ontologías no occidentales son mucho más ricas. Aquí, en este continente, están en las calles, en los pueblos; ontologías que tienen un respeto muy grande por los ancestros, que todavía son considerados vivos dentro de la comunidad. Por eso el territorio es sagrado. Es el territorio donde enterraron a sus muertos. Nosotros tenemos hoy pueblos de Mozambique, donde hago investigación, en los que los cementerios son cambiados de lugar todos los años porque se descubrieron recursos mineros debajo de ellos. ¡Es una ofensa enorme para la ontología de la gente! Sus ancestros están con ellos y, por otro lado, para ellos también están vivas las futuras generaciones. Nosotros, en el mundo occidental, no logramos entender que tenga derechos quien no tiene deberes. Por ejemplo, las futuras generaciones no tienen deberes, porque tampoco tienen deberes. La naturaleza no tiene deberes, porque tampoco tiene deberes. Esa simetría es totalmente desastrosa. Tienes que entender que las futuras generaciones tienen derechos sobre los que ya están entre nosotros hoy, como garantes de un futuro. Y de la misma manera, la naturaleza. Si no cambias la ontología, si no cambias la epistemología, más tarde o más temprano tu ética va a justificar el individualismo posesivo, el emprendedurismo salvaje, la idea de que eres un ser antisocial y de que para que tengas éxito en la vida debe haber ruinas alrededor de ti. Entonces eres un creador de ruinas. ■

Las políticas de comunicación en Argentina bajo gobiernos “progresistas”: auge, esplendor y fracaso de la democratización de los medios

El gobierno de Mauricio Macri no cumplió aún 150 días. Resultan habituales las discusiones y los debates en torno a la política económica y social, en los que se observa una profunda división entre defensores del kirchnerismo y partidarios del nuevo gobierno. Sin embargo, hay un sector en el que los cambios han sido radicales sin que la sociedad se haya hecho eco de ellos: las políticas de comunicación. Luego de la asunción de Macri, el 10 de diciembre de 2015, una serie de medidas, varias al límite de la legalidad, implicaron un giro de 180 grados en la regulación del sector audiovisual. Casi no hubo debate público, el Congreso de la Nación consintió los cambios en una sesión de la que no se supo el resultado de la votación ni quiénes votaron a favor o en contra. Con la nueva regulación, se eliminaron varios límites a la concentración de la propiedad, la televisión por cable dejó de estar sujeta a la ley audiovisual (se la pasó a considerar dentro del sector de las telecomunicaciones), y se reformularon las autoridades de aplicación: estas quedaron vinculadas directamente al gobierno y se eliminaron instancias de participación de la sociedad civil.

Cabe preguntarse cómo ha sido posible semejante transformación en tan poco tiempo. Si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue uno de los emblemas de la gestión de Cristina Fernández, los hechos parecen demostrar que tenía pies de barro. Para entender la situación, resulta conveniente repasar las políticas de comunicación de la etapa kirchnerista.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se mantuvo el modelo privatista comercial. Si bien la comunicación política del gobierno registraba algunos debates en torno a lo publicado por los grandes medios, especialmente el diario *La Nación*, durante este período se prorrogaron las licencias y se facilitaron procesos de concentración. El movimiento social comenzó a solidificar una propuesta de nueva política, al lanzar la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD); el eco en el gobierno fue menor.

Poco tiempo después de haber asumido Fernández, se desató un enfrentamiento público entre el gobierno y el grupo Clarín, que el conflicto en torno a las retenciones agrarias contribuyó a amplificar. Una de las medidas que la nueva mandataria dispuso fue poner en discusión la necesidad de aprobar una nueva ley de radiodifusión, y para ello tomó como referencia las propuestas elevadas por la CRD.

En octubre de 2009, el Congreso Nacional aprobó la LSCA para los servicios de radio, televisión abierta y de pago. La nueva



El gobierno de Cristina Fernández no mostró la misma voluntad democrática para aplicar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no llamó a concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal para su provecho y cooptó las autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria.

regulación estableció la comunicación como un derecho social y reconoció tres tipos de prestatarios de los servicios: el Estado, los privados comerciales y los privados sin fines de lucro. Para este último sector reserva 33% del espectro, siguiendo el modelo uruguayo. La ley generó un marco institucional que permitía la participación de las minorías parlamentarias en la autoridad de aplicación y en el directorio de los medios públicos. También elevó los límites anticonglomeración y reivindicaba una política de producción de contenidos a nivel nacional. La LSCA respetaba los estándares internacionales de libertad de expresión, y contó con amplio apoyo político y social de diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, universitarias, artísticas y de comunidades de pueblos originarios.

La oposición de los medios privados a la ley fue significativa, y el grupo Clarín (principal multimedio del país) consiguió bloquear judicialmente la aplicación de algunos artículos. Recién en 2013, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley fue declarada plenamente constitucional. El dictamen de la Corte es muy significativo, porque sienta jurisprudencia del más alto nivel sobre el concepto de libertad de expresión. El fallo considera sus dos dimensiones: una de carácter individual, basada en el derecho personal a hacer públicas las ideas, de la que derivan derechos patrimoniales, y otra de carácter social o colectivo, basada en asegurar al conjunto de la población el derecho a ejercer su libertad de expresión.

Luego del fallo de la Corte, el gobierno tuvo las manos libres para llevar adelante el proceso de aplicación de la ley, con el objetivo de

alcanzar una mayor democratización de los medios. Sin embargo, algunas prácticas en el sentido contrario, que comenzaron a vislumbrarse en 2010, se profundizaron. El gobierno de Fernández no mostró la misma voluntad democrática para aplicar la ley: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no llamó a concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal para su provecho y cooptó las autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria. Estas prácticas hicieron que el consenso sobre la LSCA disminuyera y que, luego de cinco años de sancionada la ley, la sociedad observara pocos cambios estructurales. Mientras tanto, el macrismo y los grandes medios insistían en que el único objetivo de la LSCA era controlar la prensa. Con el cambio de gobierno a fines de 2015, la ley sufrió cambios tan importantes que han transformado su sentido, tal como fue reseñado en el inicio.

La experiencia argentina resulta sumamente interesante en su esplendor y en su fracaso. Niveles de debate social nunca vistos, interés del Estado en sus tres poderes, fallos del poder judicial que sustentan visiones progresistas de la comunicación y una movilización social sobre la importancia de democratizar la comunicación realzan una iniciativa que supo ser ejemplar en América Latina. Su aplicación desde una perspectiva político-partidaria nos enseña la importancia de la construcción colectiva más allá de la coyuntura política de un gobierno. En Argentina, al menos, repetir la experiencia llevará años. ■

Guillermo Mastrini

Mastrini es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Profesor en la Universidad de Quilmes, donde fue director de la Maestría en Industrias Culturales, y en la Universidad de Buenos Aires, donde está a cargo de la cátedra Política y Planificación de la Comunicación. Es miembro del comité científico internacional *Television & New Media*, *Global Media and Communication* y de revistas especializadas en comunicación. Fue presidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y director de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Te odio, te temo, te necesito

Las políticas de comunicación de los gobiernos progresistas del Cono Sur

Los partidos progresistas han demostrado que pueden ganar elecciones aun con un sistema de medios concentrados en pocas manos, cuyos dueños tienen intereses económicos y políticos contrarios a sus proyectos, pero debería estar claro que no se puede transformar la sociedad sin cambios culturales, y que para ello es preciso, entre otras cosas, contar con un sistema diverso y plural de medios de comunicación. Cuando esos partidos llegaron al gobierno, tal meta estuvo presente, de modo más o menos explícito.

Sin embargo, apenas se rozó el poder de los grupos que acaparan medios, ingresos publicitarios e incidencia política. Por presión, coerción o complicidad, estos han superado varios períodos de gobiernos progresistas sin perder influencia, e incluso consolidando su posición dominante en el mercado.

Pero no todo fue gracias a su esfuerzo. También hubo graves errores o falta de claridad y convicción del lado de los gobiernos. El de Fernando Lugo en Paraguay no pudo (y no quiso) comprarse un pleito y, salvo su apuesta a construir un par de medios públicos no oficialistas, no tomó ninguna medida para democratizar la comunicación. En Chile, los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría nunca tuvieron en su agenda avanzar en garantías para una mayor diversidad y pluralismo.

Argentina aprobó una buena Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), pero la aplicó pobremente, salvo en aspectos vinculados con la promoción de la producción nacional audiovisual. No avanzó sustancialmente en asegurar la reserva de frecuencias para medios comunitarios, y el Grupo Clarín no perdió ninguna de las suyas. La judicialización fue una de las razones, pero no la única: tampoco hubo avances luego de que la Corte Suprema dio la razón al gobierno. Luego, Mauricio Macri no encontró cambios consolidados que complicaran su política restauradora.

Lo de Brasil es dramático. No se reglamentaron las disposiciones constitucionales anticoncentración, ni se fomentó el sector comunitario, ni se impulsó legislación para modificar la de los años 60. El desencuentro fue tan grande entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores que este tuvo que salir a trabajar, junto con la Central Única de los Trabajadores, para reunir firmas con el fin de presentar un proyecto de ley por iniciativa ciudadana.

En Uruguay, tras casi 12 años de gobierno del Frente Amplio, hubo algunos tibios avances, como el reconocimiento legal de los me-

dios comunitarios, pero el oligopolio de la televisión sigue intacto. No se abrió la competencia en el sector de TV para abonados y apenas se otorgaron concesiones a dos nuevas radios comerciales en el interior. Para peor, en la TV abierta siguen los mismos medios de hace 60 años, y estamos a punto de dejar caer la única chance de que haya nuevos operadores comerciales capaces de competir con "los tres grandes", a partir de la llegada de la TV digital.

La falta de avances no fue una omisión, sino una decisión política de los gobiernos progresistas acerca de su relación con los medios. La frase del título trata de resumir el complejo conjunto de dilemas que estuvo presente en casi todos ellos.

El "odio" o rechazo a medios que en general trabajaron contra el acceso al poder de las fuerzas progresistas se mezcló con el "temor" a su capacidad (real o no) para poner en jaque el proyecto de esas fuerzas. Las nuevas autoridades temieron que la información sobre sus logros y otros temas prioritarios no llegara a la gente si los medios se sentían asediados y ponían palos en la rueda. Vieron la "necesidad" de contar con su cooperación. Ya llegaría el

tiempo de pelear, pensaron. Pero nunca hay condiciones ideales.

Estos gobiernos protestan por el maltrato de los medios o la falta de cobertura de noticias positivas, pero parecen olvidar que la situación está determinada por una estructura de propiedad vinculada con los anteriores gobiernos de derecha, que habría que cambiar, y se dirigen por igual, a lo bruto, contra medios, dueños y periodistas, como si fueran lo mismo, confundiendo la crítica democrática al poder (aunque sea injusta y sin fundamento) con ataques y maniobras.

Los tienta buscar contactos directos con la población y crear medios "propios", sean estos públicos y oficialistas o en alianza con privados cuyos dueños, incluso de derecha, se prestan circunstancialmente a acompañarlos, o por lo menos a no atacarlos. Se confunde la noción de políticas públicas de comunicación (cómo hacer para que el sistema de medios funcione de modo adecuado a una democracia y con

respeto a la libertad de expresión, en términos de política de Estado) con la comunicación política de gobierno (cómo hacer para que su desempeño sea conocido y aprobado por la gente, en términos de política de gobierno o de partido).

En Uruguay estamos a tiempo para aprender de los errores. Una mirada regional muestra que lo que no se hace al comienzo de un período de gobierno no se puede hacer al final, cuando aumenta la vulnerabilidad a las presiones de los medios. Ya logramos algo que no se alcanzó en otros países: aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual participativa, transparente, equilibrada y garantista, que busca asegurar un acceso equitativo y una mayor diversidad de medios, sin avasallar libertades fundamentales. Pero su aplicación integral no se ha concretado, aunque está vigente desde enero de 2015.

Los derechos que no se ejercen y las leyes que no se aplican son borrados sin esfuerzo por un gobierno revanchista de derecha. La experiencia argentina debería servirnos para aprender esa lección. ■

Gustavo Gómez

Gómez es director ejecutivo de Observacom. Investigador y especialista en libertad de expresión. Fue director nacional de Telecomunicaciones en 2010 y 2011.

Cancha abierta, pero embarrada

Entre 2003 y 2004, en el Frente Amplio se formuló un diagnóstico y un programa para encarar la realidad de los medios de comunicación del país. Es un buen momento para hacer un balance.

La estrategia propuesta planteaba, básicamente, abrir la cancha y fijar nuevas reglas de juego, buscando un nuevo equilibrio en el sistema mediático. Abrir la cancha a nuevos actores emergentes -la producción audiovisual independiente, los medios comunitarios- y fortalecer otros viejos e históricamente débiles: los medios público-estatales. Fijar nuevas reglas para el sector que siempre fue dominante, el de los medios privados comerciales, que desestimularan la concentración en pocas manos. Abrir la cancha también a la participación social en el diseño y la implementación de las políticas de comunicación. Veamos qué ha pasado en cada una de estas líneas programáticas.

La Ley de Radiodifusión Comunitaria, aprobada en 2007, permitió regularizar la situación de muchas pequeñas radios hasta entonces perseguidas como ilegales y estimuló otras experiencias de ese tipo. Fue también un banco de pruebas para nuevas reglas de juego, más claras, transparentes y con participación social, para decidir a quiénes se les da la posibilidad de utilizar una parte del espectro radioeléctrico. Hoy hay más de un centenar de radios comunitarias que funcionan legalmente en todo el país. Pero a muchas les resulta difícil mantener al aire una programación continua y de interés para su audiencia potencial, en parte por debilidades propias y en parte porque faltaron políticas vigorosas de fomento del

sector. La televisión comunitaria, con un único proyecto presentado, el del PIT-CNT, es todavía una incógnita en cuanto a su desarrollo y alcance. Mi balance: la apuesta por el sector social-comunitario sigue siendo válida, pero no se hizo con mucha fuerza y no ha dado hasta ahora resultados demasiado relevantes en cuanto a un nuevo equilibrio del sistema mediático.

La producción audiovisual independiente creció en los últimos años, por su propio impulso y con políticas de fomento, que incluyeron el fortalecimiento del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay y la Ley de Cine, de 2008. Pero no encontró nunca un lugar relevante en la pantalla que mueve el fiel de la balanza económica y de audiencias, la de la televisión. Las mayores apuestas en este sentido fueron, quizás, los llamados a nuevos canales digitales en 2013 y las cuotas de pantalla y fondos de fomento previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), de 2014. La primera parece haber fracasado, por razones que no tengo espacio para analizar aquí. La segunda ha quedado en pausa, al preferir el gobierno esperar que se dilucidan los recursos de inconstitucionalidad presentados contra varios de sus artículos. No es posi-

ble entonces un balance definitivo, pero en todo caso no resulta alentador el reciente recorte de fondos de fomento ya existentes y las dificultades en cumplir con el Compromiso Audiovisual 2015-2020, promovido por el gobierno anterior.

La radio y la televisión estatal, históricas cenicientas del sistema de medios, se fortalecieron mucho en estos años en equipamiento, programación y cobertura geográfica, diversificando sus perfiles en el caso de las radios. Mantienen, con todo, algunas de sus dificultades de gestión y una institucionalidad que no garantiza su independencia del gobierno. La LSCA contiene elementos valiosos en esa dirección, que esperan su aplicación. La apertura de la televisión digital ha beneficiado a TV Ciudad, que la ha encarado mejor que Televisión Nacional de Uruguay, cuya pantalla queda bastante deslucida en ese contexto. La audiencia de los medios estatales creció en estos años, aunque sigue siendo relativamente minoritaria. En 2010 se inició el camino hacia la LSCA, también de modo participativo: el Comité Técnico Consultivo, integrado por actores empresariales, sociales y académicos. Este primer intento culminó con el envío de un proyecto al Parlamento, que lo convirtió en ley a fines de 2014, ley

que aún espera su aplicación. También tuvo marchas y contramarchas el camino hacia la televisión digital, y eso puede haber dañado la credibilidad del proceso de asignación de nuevos canales. Faltó información básica: la mayoría de los uruguayos ignora aún que puede ver TV digital gratuita y cómo acceder a ella.

Una dificultad inicial del primer gobierno de izquierda fue la falta de una institucionalidad adecuada. La eliminación de la Dirección Nacional de Comunicaciones, en 2005, y la creación de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, en el Ministerio de Industria, pareció ser un paso en esa dirección, pero recién en 2008 empezó a funcionar casi sin personal. En 2010 se la fortaleció y tomó un rol muy activo en el diseño de políticas, pero desde 2015 parece contar con menos recursos otra vez. Entretanto, se desactivaron los mecanismos de participación social existentes, ya que la LSCA prevé otros que aún no se han im-

plementado, así como la instalación del Consejo de Comunicación Audiovisual, un avance en materia de independencia de los organismos reguladores. Este *impasse* hace, por ejemplo, que los llamados a nuevas radios comerciales y comunitarias en el interior realizados en 2013 hayan quedado sin resoluciones definitivas.

En síntesis, la cancha se abrió a nuevos jugadores, pero no tanto ni con la fuerza suficiente como para generar un nuevo equilibrio en el sistema mediático. Posiblemente parte del problema está en esos mismos jugadores, pero también ha faltado rumbo claro y firme en las políticas públicas. La cancha está un poco más abierta, pero sigue muy embarrada. Se impulsaron nuevas reglas de juego, pero tampoco con la claridad y la firmeza suficientes como para alterar hasta ahora aspectos claves, como la concentración. Se trata entonces de construir la fuerza social suficiente para impulsar cambios, tejiendo alianzas más amplias y sumando a muchos que aún creen que el sistema de medios existente es el único posible. ■

Gabriel Kaplún

Kaplún es magíster en Educación y doctor en Estudios Culturales y profesor titular de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Coordinó la Unidad Temática de Medios de Comunicación de la Comisión de Programa del Frente Amplio (2003-2004) y presidió el Comité Técnico Consultivo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2010).

Cómo reiniciar el sistema operativo de la emancipación

Más de treinta investigadores y activistas de quince países se reunieron en Ámsterdam los días 13 y 14 de febrero de 2016. El motivo era el diseño participativo de la agenda de investigación del Proyecto Nueva Política (*New Politics*), una iniciativa del Transnational Institute (TNI). Los invitados provenían de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, universidades, centros de investigación y universidades de Europa, las Américas, África y Asia.

En la sesión de apertura, Christophe Aguiton –académico, sindicalista y militante de Attac Francia– ofreció un análisis de las principales características, desafíos y oportunidades para la “nueva política”. Aguiton argumentó que a pesar de recientes reveses, la izquierda podría ser hoy más fuerte que antes de la crisis mundial del 2008. Esto es evidente “en el surgimiento de nuevos partidos y movimientos contrahegemónicos y en el surgimiento de voces disidentes dentro del sistema dominante”. Más allá de discusiones abstractas sobre su fuerza relativa, “la izquierda está todavía muy anclada en el marco doctrinario del siglo pasado”, aclaró.

La Nueva Política en el Norte

Vedran Horvat –Director del Instituto de Ecología Política (IPE) de Zagreb– argumentó que “la izquierda debe desafiar los supuestos sobre el crecimiento permanente y tener en cuenta las limitaciones planetarias, revalorizando la dimensión ambiental”. En relación a Europa, alertó sobre “el agresivo resurgimiento de la política identitaria en torno a la inmigración, que desplaza la atención de las luchas sociales y económicas”.

Andreas Karitzis –un filósofo ex miembro del comité central de Syriza– se centró en las opciones para la construcción del poder popular, en lugar de “simplemente apostar a la gestión de las ya agotadas instituciones políticas tradicionales”. Con base en la experiencia frustrada de la izquierda griega en el gobierno, Karitzis afirmó que en Europa la democracia está siendo recortada. “La izquierda necesita entonces reajustar su sistema operativo” y cambiar sus prioridades: “de la representación política a la potenciación de redes autónomas de producción de poder económico social”.

Dos participantes estadounidenses analizaron cambios en curso en la política del país. Patrick Barrett, de la Universidad de Wisconsin-Madison, se refirió al significado y las perspectivas de Bernie Sanders. “Aunque es difícil no entusiasmarse, existen limitaciones y riesgos graves planteados por la campaña de Bernie”. La aparición de Sanders “es un síntoma de la crisis política, y sus partidarios expresan la indignación generalizada ante la creciente polarización social y económica”. Barrett también aclaró que “Bernie no es un halcón en política exterior, pero tampoco es un antiimperialista”.

Laura Flandes –periodista y comentarista política– afirmó que “no habrá ninguna revolución Sanders”. La política contrahegemónica en Estados Unidos está pasando de la dispersión a la convergencia, pero sin consenso sobre el eje de la confluencia. “Las protestas en Wisconsin y el movimiento *Occupy* en Nueva York y otras ciudades, constituyeron espacios reales de convergencia, pero sin que se acordara un programa común”. Sin embargo, Flandes identificó tendencias positivas en movilizaciones sociales recientes, tales como “la serie de manifestaciones urbanas en torno al salario mínimo, la iniciativa *Black Lives Matter* de las comunidades afroamericanas, la aparición de nuevos sindicatos de izquierda, el activismo contra el oleoducto Keystone y varios otros ejemplos de resistencia contra el poder corporativo, la austeridad, la supremacía blanca y las políticas conservadoras”.

La Nueva Política en el Sur

“Se podría pensar que la izquierda sigue siendo fuerte en el África subsahariana, considerando la cantidad de viejos guerrilleros que hoy detentan el poder en la región, pero en realidad es hoy más débil que nunca”, argumentó Olmo von Meijenfeldt, el Director de la Fundación Democracy Works, un centro de estudios de Johannesburgo. En el contexto africano, “los antiguos movimientos de liberación nacional han instaurado una modalidad superficial de democracia, mientras que el Estado continuo sigue basado en las mismas estructuras de la época colonial”. La parálisis política es consistente con “la creciente desigualdad y la falta de oportunidades económicas y espacios de participación política para los jóvenes, lo que conduce a la inestabilidad permanente”, razonó von Meijenfeldt.

Dinga Sikwebu, Coordinador del Frente Unido (UF) y miembro de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), analizó el proceso de desintegración del proyecto de liberación nacional. “En Sudáfrica, el significado del ‘desarrollo’ se ha reducido a la producción extractivista de minerales y energía controlada por unas pocas empresas”. En los últimos tiempos Sudáfrica ha sufrido los altibajos de los precios internacionales de los commodities y una crisis energética severa. “Hoy presenciamos la fractura simultánea del partido en el poder (Congreso Nacional Africano, ANC) y del movimiento obrero, resultante de huelgas masivas y la masacre de mineros en Marikana en 2012”, explicó Sikwebu. NUMSA ha sido expulsada de la federación sindical principal, COSATU, y junto con otros sindicatos está organizando una nueva central de trabajadores.

Según Brian Ashley, Director del Centro de Información y Desarrollo Alternativo de Ciudad del Cabo, “la izquierda africana aún no ha entrado al siglo XXI”. África es “un continente enorme e inter-

Daniel Chavez, uruguayo, es el facilitador del Proyecto Nueva Política del Transnational Institute. Es Antropólogo Social por la Universidad de la República y Magister y Doctor en Políticas de Desarrollo por el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Este artículo es la versión abreviada de un informe más extenso disponible en la página web del TNI (www.tni.org).

namente desconectado, en el que vemos un resurgimiento de la sociedad civil, pero sin trascender la agenda neoliberal. Han surgido nuevos partidos de izquierda, pero no necesariamente más radicales o innovadores”. Ashley explicó cómo en Sudáfrica, en el contexto de la ruptura con el ANC y el ya evidente agotamiento del proyecto de liberación nacional, “las movilizaciones de los mineros, trabajadores agrícolas, estudiantes y desempleados constituyen el espacio para el surgimiento de nuevos actores políticos y sociales”.

En India, la izquierda también enfrenta una grave crisis que afecta tanto a partidos como a movimientos sociales, según el análisis de Meena Menon, una famosa periodista independiente. “Narendra Modi lidera un agresivo gobierno de derecha, pero la izquierda no aparece como alternativa electoral”. El panorama actual también incluye grupos guerrilleros maoístas ultra-sectarios y organizaciones sociales neofascistas de inspiración religiosa. Sin embargo, Menon se mostró optimista ante el surgimiento “de muchos movimientos progresistas, incluyendo el activismo de los Dalit (la casta más baja), movilizaciones feministas y agricultores que luchan contra la apropiación de tierras”.

Edgardo Lander, profesor de la Universidad Central de Venezuela, planteó que hablar de la izquierda en América Latina hoy en día no es fácil, ya que el objeto de análisis es internamente contradictorio. Lander identificó varias corrientes que no necesariamente convergen: “enfoques antiimperialistas y anticapitalistas, así como otros centrados en alternativas al desarrollo”. Lander aclaró que estos enfoques no son necesariamente excluyentes, ya que representan tendencias e imaginarios estrechamente entrelazados en la praxis política actual.

Ana Dinerstein, del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Bath, cuestionó la dicotomía “autonomía versus estatismo” y resaltó la necesidad de “trascender simplistas formulaciones binarias”. Desde que John Holloway publicara en 2002 su famoso libro inspirado en la experiencia de los Zapatistas, la izquierda se divide en dos bloques. Por un lado, “quienes proponen la autonomía como estrategia política basada en la democracia

directa, formas anti-burocráticas de autogestión, y el rechazo al extractivismo”. Por otro lado, “los defensores de la tradicional estrategia de tomar el poder estatal”. Dinerstein planteó que “esta contradicción reproduce el debate histórico que enfrentó a anarquistas y marxistas” y que “existen espacios de confluencia y síntesis”.

El proyecto estratégico de la izquierda

Erik Olin Wright, Profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, hizo hincapié en “la necesidad de rediscutir las estrategias anticapitalistas”, reconsiderando “lo que podríamos lograr, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las ambiciones de nuestras estrategias”.

Wright identificó cuatro lógicas de anticapitalismo: asaltar, domesticar, aliviar o erosionar el capitalismo, las que a menudo coexisten. “Asaltar el capitalismo significa la revolución; la idea central es atacar el núcleo del sistema y tomar el poder del Estado. Domesticar significa una estrategia reformista: cambiar las reglas que regulan el capitalismo para mitigar sus efectos nocivos, dejando que el capitalismo siga siendo capitalismo pero menos perjudicial. Aliviar significa intentar cambiar los actores y las reglas de juego para evitar daños, pero sin el objetivo de cambiar el sistema. Erosionar el capitalismo es una opción menos probada; significa abordar el problema de la transformación mediante la construcción de alternativas”.

Erosionar el capitalismo, tal como lo explica Wright, significa “entender a todos los sistemas socioeconómicos como una mezcla compleja de diversos tipos de estructuras y relaciones políticas y económicas”. Nunca ha existido en ninguna parte del mundo una sociedad puramente capitalista y estructurada en torno a los tres componentes esenciales: la propiedad privada del capital, la producción de mercado con fines de lucro, y la contratación los trabajadores que no son propietarios de los medios de producción. Debido a que “todo sistema socioeconómico es un híbrido que incluye estructuras completamente no-capitalistas e incluso anticapitalistas, es posible erosionar el sistema mediante el desarrollo de relaciones más democráticas, participativas e igualitarias en los espacios y grietas del capitalismo, luchando para expandir y defender esas alternativas”.

Tomislav Tomasevic, del Instituto de Ecología Política de Croacia, destacó la importancia de los bienes comunes (*the commons*) para refundar la izquierda. Tomasevic analizó cómo la significación de los bienes comunes está aportando “un nuevo marco para luchas emancipatorias que reconcilia los valores fundacionales de la izquierda con las preocupaciones ambientales y otros asuntos urgentes de nuestro tiempo”. La izquierda autonomista “ha ampliado la comprensión original y estrecha de los comunes a mucho más allá de los

recursos naturales, para incluir el conocimiento y otros bienes culturales”, explicó.

Sol Trumbo, un economista español participante en diversas redes europeas, aportó la perspectiva de un joven activista: “De la misma manera que otras personas se refieren a la *generación de 1968* yo me reconozco como perteneciente a la *generación del 2001*”. Trumbo se refirió a múltiples procesos sociales y políticos que surgieron alrededor de ese año, los que “deberían ser estudiados por el Proyecto Nueva Política con el fin de comprender los significados del activismo y la emancipación entre los jóvenes”. En concreto, propuso “evaluar la importancia de la ‘primavera árabe’, el movimiento 15-M en España, las movilizaciones *Occupy* y las protestas en torno a la consigna del *somos el 99%*”.

Alfredo Ramos, politólogo y asesor técnico de la bancada de Podemos en la Asamblea de Madrid, también analizó las características y la importancia de las nuevas formas de movilización social y organización política, en particular en contextos metropolitanos. Ramos rechazó “interpretaciones románticas de la creación de Podemos como consecuencia directa del 15M”. También propuso “volver a discutir si los partidos políticos siguen siendo necesarios para representar los intereses sociales, así como la cuestión de la democracia interna, incluso en aquellos partidos que son supuestamente más democráticos y participativos”.

Muchos participantes se refirieron a los dramáticos desafíos que enfrenta la izquierda hoy. Es cada día más evidente que las crisis paralelas del capitalismo global amenazan la supervivencia de la humanidad y del planeta. El cambio climático está causando catástrofes ambientales y sociales. La crisis financiera global ha derivado en un neoliberalismo reforzado, con democracias más débiles, más austeridad y más despojo. La riqueza y el poder están cada vez más concentrados en menos manos. Los intereses corporativos están desmantelando el Estado del Bienestar. Los gobiernos nacionales tienden a subordinarse a intereses privados plasmados en acuerdos de comercio e inversión secretos, mientras construyen muros contra inmigrantes y supuestos terroristas. La quiebra de los viejos modelos de producción y la intensificación de la innovación tecnológica conducen a una configuración más descentralizada de la economía y de la política. Mientras tanto, la izquierda se enfrenta a la creciente fragmentación, la crisis organizativa y la desorientación ideológica. En este contexto, el Proyecto Nueva Política se propone promover nuevas ideas e intercambios entre investigadores y activistas de diversas regiones del mundo para contribuir a la construcción intelectual en respuesta a tales desafíos. ■

El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina y su crisis

Desde comienzos del Siglo XXI se configuró en la región un nuevo mapa político cuyo carácter definitorio (progresista, pos-neoliberal, izquierdista, consenso nacional popular, neo-desarrollista o neo-extractivista) fue y sigue siendo objeto de debates. Algunos investigadores preferimos caracterizar a esta etapa como *ciclo de impugnación al neoliberalismo* (CINAL), para expresar su carácter fluido y en disputa, e incluir los rasgos comunes y más característicos que presentan los distintos procesos, más allá de sus especificidades nacionales. El ciclo ha entrado en un cono de sombra a partir de 2013, con la muerte de Hugo Chávez, y la crisis se ha agudizado como resultado de cambios drásticos en el escenario económico mundial.

Este ciclo surgió como producto y respuesta a la intensificación de las luchas populares desplegadas en los años previos. Con la llegada de gobiernos que cuestionaban el paradigma neoliberal se produjo un cambio importante en la correlación de fuerzas sociales a escalas nacional y regional y la configuración de un escenario de disputa por la hegemonía. Los gobiernos del CINAL asumieron, con amplitud y profundidad diversas, las demandas populares que empujaron sus triunfos electorales, habilitando un abanico de transformaciones económicas, políticas y sociales muy genéricamente definidas como “progresistas”, en comparación con las modalidades neoliberales que las precedieron. Sin embargo, solo en Bolivia llegó a la presidencia una fuerza política surgida desde las luchas de los movimientos sociales. En los demás casos, los malestares y protestas ya aparecían mediados políticamente cuando se instalaron los nuevos gobiernos.

El CINAL se desplegó en un contexto económico internacional caracterizado por el boom de los precios de los *commodities*. El ascenso de China como comprador masivo de la soja, el petróleo, el gas y los minerales que exporta la región, produjo un importante crecimiento económico en la mayoría de los países, incluidos los que siguieron anclados en el molde neoliberal (como México, Colombia, Perú y Chile). El CINAL acentuó las tendencias a la reprimarización y el extractivismo preexistentes, pero también brindó la base económica para que se implementaran políticas redistributivas del ingreso, asistencia social masiva, fomento del consumo y crecimiento del empleo.

En el marco de este proceso se reinstaló el Estado-Nación como actor preponderante *vis-à-vis* el mercado mundial y con mayores márgenes de autonomía relativa. Mientras durante el neoliberalismo de los 90 toda la fuerza del

Estado se dirigía a privilegiar el papel del mercado como articulador de la vida social, en el nuevo siglo se produjo una reacción cuestionadora de la primacía de la lógica mercantil por sobre la voluntad política.

La bonanza de las exportaciones brindó a los gobiernos del CINAL un mayor margen de acción para enfrentar a los poderes económicos y políticos externos (principalmente Estados Unidos) y a los grupos dominantes de base nacional. Así, el Estado reforzó su papel arbitral entre clases y fracciones en pugna y su rol mediador en el conflicto capital-trabajo. Mediante la re-estatización o creación de empresas nacionales, la apropiación y gestión de la renta extraordinaria (gas, petróleo), o la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras, los gobiernos del CINAL (a diferencia de los anclados en el neoliberalismo puro y duro) lograron generar recursos con los cuales financiar políticas públicas asistencialistas para los sectores más postergados, aumentar y sostener la tasa de empleo y ampliar el consumo interno. La consecuencia positiva fue una considerable ampliación de derechos y mejoras materiales palpables (vía políticas de ingresos y subsidios directos) para grandes sectores de la población y el empresariado local.

Sin embargo, al no afectarse las estructuras económicas heredadas, la sustentabilidad económica y política de los cambios no fue garantizada. Esto debido a que, durante el CINAL se profundizaron los esquemas productivos basados en la explotación de recursos naturales (extractivismo) alineados con el modelo de acumulación global. Brasil es un caso paradigmático: las exportaciones primarias desplazaron del primer lugar a las industriales, torciendo el patrón de crecimiento del gigante sudamericano. Las propuestas de transformación de la matriz productiva enunciadas como deseables por varios gobiernos, quedaron subordinadas al aprovechamiento inmediato de los recursos provenientes de las exportaciones y, de este modo, permanecieron firmemente engrazadas en el ciclo neoliberal del capitalismo mundial.

Durante este ciclo también se promovieron “pactos de consumo y empleo” basados en asegurar el trabajo y ampliar la capacidad de compra popular, con consecuencias paradójicas. Satisfacer demandas materiales, injustamente postergadas por décadas de ajuste, fue el eje de su apelación hegemónica. Cuando el mejor acceso a condiciones básicas de vida y a bienes de consumo masivo es una conquista de las luchas populares su legitimidad es incuestionable. Pero cuando se enmarca en las



* FOTO: NICOLÁS CELAYA

formas actuales de producción capitalista es posible cuestionar su relevancia para potenciar procesos de transformación social radical. Se plantea una contradicción entre la legitimidad y la justicia de satisfacer demandas postergadas y el simultáneo fomento de un consumismo acrítico e insostenible a largo plazo. Más allá de la apelación al *buen vivir* y a sinceros esfuerzos por generar mayores niveles de conciencia con respecto a los bienes comunes, un déficit notorio del CINAL fue que no se propuso librar ninguna batalla intelectual y moral de envergadura contra los valores del consumismo capitalista.

Asimismo, se apostó por mantener a la democracia liberal representativa como soporte político principal, con elecciones regulares que marcaron los ritmos de la legitimidad política y las posibilidades de avanzar hacia cambios más profundos. En este contexto se produjo un fenómeno que, siguiendo el concepto de *revolución pasiva* originalmente propuesto por Gramsci, podemos caracterizar como *pasivización*. Massimo Modonesi ha señalado que la dinámica de protesta y el espíritu de confrontación antagonista desplegado por las clases populares contra las recetas neoliberales lograron ser metabolizados por los gobiernos del CINAL para garantizar la estabilización y la continuidad sistémi-

ca, aunque incorporando parte de las demandas de las clases subalternas. Salvo en Venezuela, donde se creó un esquema de poder comunal con el propósito de desarrollar formas de participación popular de nuevo tipo, en los demás procesos no se avanzó mucho en la transformación de las bases de sustentación política. Se mantuvieron los formatos estatales heredados, aunque con renovación étnica y social de los elencos de gestión (en Bolivia), una apuesta por la modernización basada en la capacitación técnica y metas meritocráticas y eficientistas (en Ecuador), o la creación de programas estatales para atender demandas específicas pero bajo condiciones institucionales y laborales precarias y reversibles (en Argentina). Simultáneamente, se percibe que a los movimientos sociales les resultó difícil sostener su nivel de movilización a medida que los gobiernos iban satisfaciendo algunas de sus demandas. Esta realidad refleja la complejidad de los ciclos de ascenso, estancamiento y baja de las luchas populares.

Cuando, a partir de 2011, los efectos de la crisis mundial empezaron a sentirse en la región con la caída drástica de los precios de los *commodities*, los problemas acumulados se agudizaron, dando lugar a una ofensiva de la derecha que jaqueó a los gobiernos del CINAL. Este ciclo surgió de una determinada relación de fuerzas favorable a los sectores populares; pero esa relación no quedó congelada, sino que el embate de las clases dominantes alteró las posiciones iniciales. La derecha no se ha quedado quieta durante este ciclo y ha recurrido a todo su arsenal de recursos para que su predominio político estuviera a la altura de su inamovible supremacía económica y social. La crisis agudizó la inquina contra los líderes llamados ‘populistas’ y facilitó apelar a ficciones institucionales para encubrir malamente golpes de Estado (Honduras, Paraguay y ahora, Brasil) y operaciones mediáticas y electorales (en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina) para que los sectores tradicionalmente dominantes retomen el control del gobierno nacional.

Las experiencias del CINAL han demostrado que la llegada al gobierno y la conducción del aparato estatal por fuerzas políticas de arraigo popular no constituyen una condición suficiente para transformar la estructura económica, social y política en el marco del capitalismo global. Ocupar el Estado puede incluso derivar en la domesticación de la potencialidad transformadora y en la subordinación a la dinámica institucional que asegura la continuidad sistémica. No obstante, estas experiencias también han permitido constatar que permanecer al margen de la disputa por el poder estatal tampoco garantiza triunfos ni escenarios de lucha más favorables, ni (menos aún) mejores condiciones de vida para los sectores populares, como lo muestran los casos de Colombia, México y Perú. Las políticas regresivas que viene ejecutando a toda velocidad el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, desde el 10 de diciembre de 2015, son una prueba contundente de los impactos negativos que produce la fusión del poder político y el poder social sin mediaciones en el aparato estatal. El Estado, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue siendo un factor central para la lucha política, económica, social e ideológica de América Latina. ■

Mabel Thwaites Rey

Mabel Thwaites Rey es Doctora en Derecho Político (Área Teoría del Estado) por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora Titular de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Investigadora y Directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la UBA. Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado en América Latina: logros y fatigas de los procesos políticos del nuevo siglo”.

Nueva política de izquierda: una perspectiva europea

La mayoría de los políticos piensan que los votantes son estúpidos. Muchos votantes, al ser personas inteligentes, han optado por desvincularse de la política institucional. Algunos, sin embargo, han confluído en torno a ciertos políticos raros que les tratan como iguales. Políticos como Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, una activista social que hasta hace poco lideraba la lucha contra los bancos para parar los desalojos. O como Jeremy Corbyn, un parlamentario rebelde que hoy lidera el Partido Laborista británico. Corbyn ha declarado que nunca apreció a “aquellos que por tener algún título universitario o alguna calificación particular se sienten superiores”, agregando que “algunas de las personas más sabias que he conocido barren nuestras calles”.

Mi intención es tomarme la “nueva política” (*new politics*) muy en serio, ya sea la que surge en España, en Grecia o en el Reino Unido, y analizar qué instituciones políticas, del Estado y del partido serían compatibles con la integración del conocimiento social práctico en los procesos de toma de decisiones.

Me reconozco como militante. Siempre he reclamado una nueva política de izquierda, pero esta idea siempre ha sido marginal en Europa. Ahora, para mi sorpresa, la misma idea se expande. ¿Pero existen factores sociales y económicos que la hagan posible? ¿Y qué entendemos como *nueva política de izquierda*? ¿Hasta donde es posible avanzar y qué se puede lograr en el marco de las instituciones políticas existentes? ¿Qué nuevas fuentes de poder debemos construir en la sociedad y en la economía como cimiento de nuevas instituciones? ¿Qué alianzas son necesarias?

En realidad, la idea de la nueva política ha estado en discusión por lo menos desde las revueltas sociales de los años 60 y la crisis económica de los 70. En mi país, el Reino Unido, referencias a la nueva política ya habían aparecido en los discursos de políticos laboristas tan disímiles como Tony Benn (el abanderado del laborismo de izquierda) y Tony Blair (el propulsor de la deslucida ‘tercera vía’), y ahora en los de Jeremy Corbyn. Desde el bando opuesto, Margaret Thatcher, la voz más influyente del Partido Conservador, también reclamaba una nueva política. Desde diferentes perspectivas, tanto la izquierda como la derecha han tratado de crear un nuevo orden para reemplazar el viejo acuerdo de posguerra en torno a la economía regulada y ‘mixta’ basada en un Estado paternalista, la producción en masa y el pleno empleo.

Fueron políticos de derecha, Margaret Thatcher en Europa y Ronald Reagan en Estados Unidos, quienes se atrevieron a cuestionar las bases del acuerdo. Incluso fueron capaces de cooptar a la ‘izquierda renovadora’ de los años 80 y 90, la que también se había rebelado contra los estrechos horizontes del consenso de posguerra. Una buena parte de la izquierda socialdemócrata reconoció al neoliberalismo

A partir del análisis de recientes mutaciones en las estructuras políticas y económicas del capitalismo en crisis, la influyente pensadora y militante feminista y eco-socialista británica propone una refundación radical del pensamiento y la práctica de la izquierda europea (y mundial) basada en repensar los conceptos de poder y conocimiento y apostando a las potencialidades de las nuevas redes y espacios colaborativos.

como el nuevo orden de facto, en la creencia de que podrían gestionarlo de forma más humana desde una supuesta ‘tercera vía’ o posicionarse defensivamente como guardianes de las banderas socialistas.

Sin embargo, al margen de las instituciones políticas convencionales, algunos activistas influenciados por la *new left* (nueva izquierda) de los años 60 y 70, siguieron experimentando con nuevos principios organizativos. Muchos fueron derrotados, algunos fueron marginados, y otros terminaron subsumidos en el marco neoliberal dominante. En este texto quiero analizar las lecciones que ofrecen esos experimentos para avanzar hacia alternativas viables. También me interesan las nuevas tendencias promovidas por las generaciones más jóvenes para la difusión de sus propios principios de organización política.

Mi observación de partida es la continuidad de ideas y prácticas desarrolladas en décadas previas por el movimiento feminista, el sindicalismo radical, las nuevas formas de organización comunitaria, los intentos de gestión empresarial cooperativa, las innovaciones políticas como el Consejo del Gran Londres (*Greater London Council*) bajo el liderazgo de Ken Livingstone y, más recientemente, por la izquierda radical que accedió al gobierno en Grecia. En todos estos procesos se puede apreciar una nueva forma de entender el poder. Este enfoque implica concebir el poder como capacidad transformadora (en particular el poder cívico) más que como expresión de la dominación o simple ámbito de disputa entre los partidos políticos.

El poder como capacidad transformadora tiene sus raíces en el conocimiento social que las instituciones dominantes tienden a desvalorizar. Las instituciones hegemónicas en el período de posguerra han asumido que el único conocimiento que importa para gobernar es el profesional. Beatrice Webb, una de las teóricas fundadoras del Estado de Bienestar, resumió este punto de vista cuando afirmó su “poca confianza en el hombre común y corriente”, supuestamente “solo capaz plantear su queja y sin capacidad de propuesta”, por lo que sería imprescindible “requerir la sabiduría que solo puede aportar el experto profesional”.

Por el contrario, la noción de conocimiento implícita en la nueva política de izquierda se basa en el reconocimiento de la importancia de sus manifestaciones prácticas y sociales para el diseño de políticas públicas y como respuesta a la narrativa neoliberal del ‘libre mercado’ como única alternativa a una supuesta ‘economía socialista’ de

planificación centralizada. En términos de sus implicancias para la política transformadora, esta concepción del conocimiento sugiere formas de producción colaborativa o solidaria, en el marco de un sistema en el que los organismos del Estado, a todos los niveles, actúan como facilitadores, conscientes de la naturaleza limitada del conocimiento puramente teórico y profesional y reconociendo que no es posible alcanzar objetivos sociales con certeza predictiva, por lo que siempre se necesitará experimentar y regenerar. De ahí la importancia de la democracia participativa al interior de las instituciones del nuevo tipo de Estado y del nuevo tipo de partido.

Este quiebre con los enfoques del pasado permitiría el fortalecimiento de iniciativas de cambio surgidas por fuera del sistema político existente que no necesariamente se perciben a sí mismas como ‘políticas’. El nuevo enfoque sustenta una visión alternativa del socialismo que no está centrada en la noción de un Estado omnisciente. El Estado pasa a ser entendido como entidad facilitadora y de apoyo a redes de producción autónoma y colaborativas, ya prefiguradas en muchas cooperativas, empresas sociales y sistemas de intercambio entre pares (*peer-to-peer*) estimulados por la actual revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La necesidad de una nueva política está convergiendo con las oportunidades precarias y resistidas que ahora se abren para construir una nueva economía. Voy a analizar a continuación cómo diferentes lógicas de acción descentralizada y coordinada están convergiendo.

Nueva política de izquierda

Durante los últimos cuatro décadas, desde finales de los 60, diferentes corrientes de la izquierda se han apartado, en la teoría y en la práctica, del consenso de posguerra en torno al rol esencial del Estado en la provisión de servicios sociales y en la ejecución de políticas económicas basadas en la presunción del crecimiento permanente como objetivo primordial. También han surgido tendencias que han promovido un ruptura más radical con la idea del partido político y el Estado como instrumentos principales del cambio social.

Hasta hace poco tiempo, hasta el surgimiento de Syriza en Grecia, de Podemos en España y del giro a la izquierda en el liderazgo del Partido Laborista en el Reino Unido, estas corrientes han sido marginales en la izquierda europea. El telón de fondo de la expansión de estas tendencias ha sido la reaparición cada vez más

frecuente y más profunda de la crisis económica, social y política que expone el agotamiento de las instituciones del viejo orden y de su sucesor neoliberal. A continuación se describen las bases de la nueva mentalidad política emergente en la izquierda, haciendo referencia a ejemplos clave para ilustrar su importancia.

Repensar el poder

La reciente experiencia frustrada de Syriza, el partido de la izquierda radical de Grecia, al frente de un gobierno democrático que se enfrentó a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional (entidades que explícitamente se niegan a permitir que las elecciones interfieran con los tratados económicos vigentes), así como la del Partido de los Trabajadores en Brasil, indican que el éxito electoral es una fuente insuficiente de poder. También demuestran la necesidad de hacer uso del conocimiento social para lograr las transformaciones que tanto los partidos de izquierda como los movimientos proponen.

Los problemas de relacionamiento entre los partidos y los movimientos no pueden ser resueltos optando de forma excluyente por la política electoral o por el desarrollo de organizaciones sociales autónomas. La estrategia adecuada implica la comprensión de la compleja relación entre las dos formas organizativas y el diseño de instituciones a través de las cuales se pueda lograr un mayor equilibrio, procurando combinar las dos formas para alcanzar el máximo impacto.

Para concebir posibles combinaciones es necesario plantear una distinción entre dos acepciones del poder. Por un lado existe el *poder sobre*, entendido como dominación y como asimetría entre quienes tienen el poder y aquellos sobre los cuales el poder se ejerce. Por otro lado existe el *poder para*, entendido como capacidad de transformación. Históricamente, los partidos socialdemócratas y comunistas han actuado en base a una versión más o menos benévola o paternalista del poder como dominación. Sus estrategias se han basado en ganar el poder para gobernar y luego dirigir el aparato del Estado para dar satisfacción a lo que ellos identifican como necesidades sociales.

La noción de poder como capacidad transformadora surgió de la frustración generalizada en torno al poder como dominación ejercido por los partidos de la izquierda tradicional. La característica distintiva de las rebeliones de los años 60 y 70 fue que los ciudadanos decidieron apropiarse del poder sin intermediarios, descubriendo a través de la acción colectiva que tenían ca-

pacidades propias y no limitadas a ejercer presión sobre el partido de gobierno como estrategia de cambio político y social. La capacidad transformadora, como voy a ilustrar, trascendía a la representación como el foco principal o único de la política radical.

La distinción entre las dos formas de poder es central para reconocer las nuevas formas organizativas que están surgiendo hoy. En un momento en que los antiguos métodos de organización y movilización (tales como la acción sindical de masas) resultan insuficientes para responder a los nuevos desafíos, esta distinción nos ayuda a centrarnos en las formas más apropiadas de organización en un contexto de extrema fragmentación, precariedad y dispersión de los trabajadores.

Política y conocimiento

Un tema central y común de las rebeliones de los años 60 y 70 fue resistir la subordinación a la autoridad. Se rompió el vínculo entre el conocimiento y el poder establecido. Esta ruptura se combinó con una reafirmación generalizada del conocimiento social práctico. La ciudadanía se opusieron a la pretensión de los detentores de la autoridad de “saber lo que ‘la gente’ necesita” desarrollando su inventiva a través de nuevas formas de organización que consolidaban la capacidad transformadora del conocimiento social.

Los movimientos surgidos en esos años se embarcaron en un proceso incierto y experimental de democratización del conocimiento. En la práctica, llegaron a establecer (antes de Internet) formas de organización descentralizada y en red, compartiendo y creando conocimientos de forma horizontal y rompiendo con los modelos jerárquicos que suponían el liderazgo de los ‘expertos’ marginalizando a los miembros supuestamente más ‘ignorantes’.

Los enfoques radicalmente democráticos sobre la producción y el intercambio del conocimiento que surgieron en los 60 y 70 establecieron las bases organizativas y culturales que han nutrido a muchos movimientos cívicos posteriores, desde el movimiento por la ‘alter-globalización’ a los *Occupy* e *Indignados* de esta década, incluyendo (de forma cautelosa y muy británica) al movimiento que ha surgido en mi país alrededor de la figura de Jeremy Corbyn.

Lógicas convergentes

Una consecuencia de la importancia fundamental de concebir el poder como capacidad transformadora es que nos permite pensar de manera sistemática sobre la creatividad humana como eje de la estrategia de construcción de nuevas instituciones políticas. Podemos explorar la significación de este enfoque en el campo de la economía. Desde hace un tiempo estoy investigando un cambio de perspectiva en la izquierda que implica ir más allá de la vieja propuesta de ‘nacionalización de la industria básica’ y proponer

ideas innovadoras, orientadas a una nueva economía colaborativa en la que las instituciones del Estado asumen un rol de facilitador y protector. Obviamente, esto también significa defender la propiedad pública de los servicios sociales y de la infraestructura básica, pero con grados mayores de gestión descentralizada, por ejemplo en el campo de la energía. Pero lo más importante es explorar cómo la noción del poder como capacidad transformadora se aplica a la producción.

El poder como capacidad transformadora surge de nuestra capacidad creativa individual y de nuestra propia naturaleza como seres sociales. Se basa en la importancia de la creatividad humana como espacio de colaboración. Esta idea es fundamental para entender las actuales modalidades de estructuración del poder político, pero también plantea nuevas preguntas sobre cómo entendemos el trabajo y la producción, dado que el poder como dominación es la base de la producción capitalista. Me interesa destacar la viabilidad de una transformación económica basada en concebir la capacidad humana de colaboración como un recurso común a ser desarrollado y utilizado para el beneficio de todos. Esto me lleva a resaltar la importancia del cada vez más influyente paradigma en torno a 'los bienes comunes' (*the commons*) para entender las potencialidades de la creatividad humana.

La creatividad humana es una condición necesaria para la gestión de otros bienes comunes: el agua, la tierra, el conocimiento, la cultura... Al ser dependiente en gran medida de las características de la educación o de la distribución de la riqueza (entre otras variables), puede ser formada, desarrollada, suprimida o desperdiciada. Al igual que los recursos naturales de importancia fundamental para la vida, la creatividad humana también necesita ser protegida y cuidada. Habiendo reconocido el debilitamiento de los métodos tradicionales de organización y de lucha de los trabajadores para preservar la dignidad del trabajo y las condiciones de desarrollo de la creatividad humana, es preciso entender las tendencias contemporáneas que favorecen el surgimiento de una nueva economía de tipo colaborativo. Esto requiere un análisis crítico de las consecuencias ambivalentes de la revolución en curso en el campo de las TIC.

Las formas de organización y de control de las TIC y el potencial del software libre y la producción distribuida constituyen un espacio de confrontación de intereses en el que las principales corporaciones transnacionales están monetizando y apropiándose del trabajo voluntario de los creadores de software y del intercambio desinteresado de los usuarios de las redes sociales. El perfil individualista de los creadores de software libre y los usuarios no contribuye a la sindicalización, pero muchos de ellos se están organizando como productores intelectuales, incluyendo la formación de cooperativas y redes híbridas. Están usando sus altos niveles de conocimiento tecnológico para mejorar la conexión, la coordinación y la colaboración para organizar



Manifestación en Amsterdam contra el TTIP, octubre de 2015 * FOTO: DANIEL CHAVEZ

nuevas formas de producción o para la auto-protección. Y lo están haciendo con nuevos códigos éticos con diversos grados de politización, tomando consciencia de la significación de las nuevas relaciones sociales y económicas a medida que éstas se desarrollan. Algunos analistas de estas tendencias argumentan que está surgiendo un nuevo modo de producción, centrado en lo que ellos llaman "la producción de bienes comunes entre pares" (*commons peer-to-peer production*).

No soy capaz de hacer un juicio tan definitivo acerca de la importancia sistémica de estas tendencias. Pero hay fuertes evidencias de la aparición de una fuerza económica, social y potencialmente política al interior de esta nueva generación de trabajadores que producen de forma individualizada pero tendientes a una mayor colaboración. Esta fuerza tiene el potencial e incluso la aspiración de ser transformadora, y aunque carece del poder colectivo de la clase obrera tradicional, se deriva de ella un poder difuso pero significativo, dado que sus habilidades y conocimientos constituyen el eje central de las nuevas formas de acumulación capitalista, de producción y comunicación cultural, y de control político y de toma de decisiones en la era de la globalización.

Las nuevas experiencias de colaboración como modelo de producción demuestran de forma clara las potencialidades inherentes a la socialización del conocimiento, por oposición al modelo del empresario individual en condiciones de libre mercado. De hecho, al menos tres de los ocho principios rectores identificados por la ganadora del Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom para la gestión de los bienes comunes reafirman la importancia de compartir el conocimiento social a través de sistemas participativos de toma de decisiones.

Mientras que los movimientos sociales de los años 60 y 70 marcaron una ruptura con la percepción hegemónica sobre la relación entre la autoridad y el conocimiento y resaltaron la importancia del conocimiento social práctico, la revolución de las TIC ha creado condiciones para construir una economía basada en el conocimiento social y cola-

borativo. En otras palabras, las nuevas herramientas tecnológicas para compartir y colaborar sin límites han creado condiciones para que la noción del poder como capacidad transformadora adquiera también una significación productiva.

Sin embargo, debo subrayar la función de protección y apoyo que deben asumir las instituciones del Estado para consolidar este nuevo paradigma productivo, pues aunque la tendencia hacia una economía colaborativa parece imparable, la forma social y económica que podría asumir es contingente. Es necesario destacar la importancia del Estado y de la política para evitar la apropiación corporativa y privatista de la creatividad humana y ampliar las potencialidades de la colaboración creando las condiciones materiales imprescindibles para su desarrollo; por ejemplo, con un sistema de renta básica universal.

Instituciones de la nueva política

Después de décadas de intentos fallidos de repensar, renovar o refundar, es necesario dar un paso atrás y asumir el desafío de la nueva política como una carrera de largo aliento. Esto nos obliga a revisar las teorías del conocimiento y cómo las mismas han dado sustento a las ideologías de la posguerra.

Estas teorías siguen influyendo en las mentalidades que animan a la izquierda contemporánea y debilitan los procesos de refundación. La presunción de la planificación socialista centralizada como única forma aceptable de organizar la producción, o la idea de que es imprescindible que un partido de izquierda acceda al gobierno para asumir el control de las palancas fundamentales de la economía, aún son hegemónicas en muchos militantes de izquierda. Los movimientos son entendidos como meros soldados de infantería que facilitan el triunfo electoral, a cambio de que el partido atienda sus demandas.

Por el contrario, los nuevos significados de los ideas de estrategia y organización que surge de mi forma de entender el conocimiento y la creatividad, implican concebir al partido más como un motociclista de escolta que como base para la experimentación y el desarrollo

de capacidades. Este enfoque requiere ver más allá de la política electoral. Este enfoque concibe a la izquierda como elemento catalizador para la construcción de poder como capacidad transformadora en el aquí y ahora, más que como un ejército empeñado en capturar las ciudadelas del poder en el futuro. Debemos discutir las implicaciones prácticas de este enfoque sobre cómo organizar partidos de nuevo tipo. En esencia, la nueva política de izquierda debería tener raíces en la producción y en la reproducción social cotidiana, y su objetivo central debería ser construir y hacer realidad las capacidades de los ciudadanos para el autogobierno y la transformación social y económica.

Producción y reproducción social

Si entendemos el poder como capacidad transformadora que incluye la recombinación de la política y la economía, a continuación, los partidos de izquierda radical de nuevo tipo deberían dejar de estar preocupados de forma obsesiva por los flujos macroeconómicos (la oferta de dinero, los niveles de impuestos y la regulación del comercio) y el marco institucional puramente nacional y prestar más atención a temas referidos a los contenidos y la organización social de la producción. ¿Qué producción y para qué? ¿Con qué tecnología? ¿Cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? ¿En base a qué tipo de conocimiento? ¿Cómo se estructuran las relaciones laborales y quienes son los consumidores de la producción?, entre otras preguntas posibles. El imperativo planetario de la transición hacia una economía baja en carbono ofrece un nuevo impulso a la creación de nuevas relaciones de producción de nuevo tipo. La revolución de las TIC y la *web* han abierto oportunidades para una nueva economía social y ecológicamente sustentable. Los partidos de la nueva izquierda, en sus programas y en sus acciones políticas, tendrían que estar inmerso en el desarrollo de estas nuevas posibilidades. Esta evolución implicaría que los miembros del partido están al tanto de las innovaciones sociales emergentes a nivel mundial y participan activamente en poten-

ciar la transición. Qué están al día con las posibilidades y las limitaciones derivadas del software de código abierto, las plataformas de cooperación, el consumo colaborativo, las nuevas formas de producir y distribuir alimentos, las formas descentralizadas y sustentables de generación y consumo de energía, los cambios en la esfera del transporte, el comercio y la finanzas, los nuevos significados de la salud, la producción cultural y otros aspectos esenciales de la nueva realidad.

Transformación del Estado

El poder entendido como dominación se ejerce de forma más clara a través del gobierno. Una nueva política de izquierda implicaría reestructurar el poder del Estado para reconvertirlo en capacidad transformadora. Pero las instituciones estatales, como todas las instituciones, dependen de relaciones sociales en permanente cambio. Una consecuencia perjudicial de la forma de entender el poder por parte de los arquitectos originales del Estado de Bienestar ha sido que los servicios públicos fueron estructurados de manera paternalista y sin participación de usuarios y trabajadores en su gestión. La tendencia de los líderes políticos a considerar los temas de la producción (de bienes, infraestructuras o servicios) como algo que sólo incumbe a los expertos profesionales demuestra que no se entiende la importancia práctica de la participación de los ciudadanos, los productores o los usuarios como forma de aumentar la eficiencia social de los organismos públicos. Como resultado, han sido limitadas las convocatorias a la movilización social para la defensa o el mejoramiento de las empresas del Estado y otros organismos públicos como base para una desmercantilización más amplia de la economía.

Sin embargo, a medida que los empresarios del Estado y los servicios públicos han debido enfrentar en Europa una oleada tras otra de privatización y recortes, los trabajadores y los usuarios se han movilizado bajo nuevas formas, no sólo para defender los salarios y las condiciones laborales, sino también para mejorar y democratizar el sector público. Estas movilizaciones constituyen una oportunidad para los partidos de nuevo tipo, como forma de consolidar cambios prefigurativos y como forma de preparación para un cambio sistémico o más profundo cuando finalmente se acceda al gobierno. No sólo a nivel nacional, ya que las ciudades tienden a ser el espacio en el que los ciudadanos se involucran de manera activa en la gestión, de manera formal e informal, y donde nuevos mecanismos institucionales para apoyarles y reconocer su capacidad pueden ser creados con mayor facilidad. Como la experiencia de la izquierda latinoamericana lo ha demostrado, el gobierno municipal puede ser el ámbito institucional desde el cual la nueva política puede consolidar su influencia política y avanzar hacia instancias superiores del poder, entendido como acción transformadora y ya no como simple dominación. ■

Frente Amplio y batllismo, tan lejos y tan cerca. O la redefinición de la izquierda uruguaya en la era progresista latinoamericana

Unos días antes de asumir la presidencia, Tabaré Vázquez afirmó que el Frente Amplio (FA) sería el batllismo del siglo XXI. En los últimos años, dicha idea se fue transformando en sentido común. A esta altura es una idea sugerida por diversos analistas, políticos frenteamplistas e incluso opositores; hasta Julio María Sanguinetti ha tenido que admitir que hay algo de verdad en ella.

La evidencia histórica es enorme. En lo económico, se puede decir que en sus dos períodos de gobierno el crecimiento económico habilitó procesos de redistribución del ingreso. En ambos casos el crecimiento fue vulnerable y se basó en la exportación de materias primas vinculadas a sectores rurales altamente concentrados. La defensa de las empresas estatales actuales se basó en aquellas heredadas del batllismo. Gran parte de las políticas sociales y laborales se basaron en mecanismos institucionales de reasignación de recursos originados en el Estado batllista. A modo de ejemplo: los consejos de salarios y el régimen de asignaciones familiares fueron creados en 1943 y resultaron ser piezas claves de las políticas de desarrollo social implementadas en este período. Asimismo, la nueva agenda de derechos guarda ciertos vínculos con la agenda cultural del primer batllismo. Por último, incluso en la política exterior, un área en la que se han evidenciado ciertas diferencias -el antiimperialismo de izquierda y el panamericanismo tradicional del batllismo-, hay una semejanza: el gobierno del FA ha mantenido una relación muy cercana con Estados Unidos. Incluso José Mujica, el presidente con mayor vocación latinoamericanista desde el retorno democrático, se enorgulleció de mantener una excelente relación con ese país.

La historia política y cultural de Montevideo da cuenta de esas similitudes. Desde 1989, la intendencia ha sido colorada o frenteamplista -el Partido Nacional fue gobierno municipal una sola vez-. Fenómenos tan diversos de la cultura de la ciudad, como el carnaval y la vida universitaria, también presenciaron la transición del batllismo al FA en dicho período.

Existen ciertas diferencias que no han sido tan destacadas. En términos de políticas económicas, el FA en el gobierno se mostró más cercano a las preocupaciones fiscales de los blancos que al impulso industrialista y proteccionista del batllismo. En términos de discurso político, el batllismo en el gobierno desarrolló un discurso más antagonizante en relación con ciertos sectores altos del mundo rural que el desarrollado por el FA. Dichas diferencias no han sido estudiadas, pero seguramente dan cuenta de las transformaciones que se han dado desde la mitad del siglo XX en la manera en que los diferentes actores económicos se relacionaron con el sistema político.

Los analistas podrán mostrar y explicar tantas continuidades, y algunas diferencias, pero para los actores del FA el asunto es un poco más complejo. Esta autoidentificación con el batllismo



Marchesi es doctor en Historia y director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Ha investigado sobre historia reciente del Uruguay y del Cono Sur.

debería llamar a una mayor reflexión dentro de la fuerza política, sobre todo porque la creación del FA fue concebida como una alternativa o una superación al modelo batllista.

Desde la década de 1950, la izquierda ha desarrollado dos tipos de crítica al batllismo. Por un lado, una crítica igualitarista, basada en las ideologías tradicionales de la izquierda: socialistas, comunistas y anarquistas denunciaban al batllismo como una forma de gatopardismo cuyo objetivo último era mantener una sociedad capitalista, algo que la izquierda aspiraba a disolver. Además, en la visión de la izquierda, el batllismo, con su lenguaje popular, sus formas de clientelismo y su uso demagógico de los recursos estatales, alejaba a los sectores populares de sus verdaderos intereses de clase.

Por otro lado, a partir de 1955, cuando la recesión económica empezó a mostrar los límites del modelo batllista, la izquierda se acercó a discursos desarrollistas, luego dependentistas, que proponían un programa de cambios radicales para superar el estancamiento. El batllismo era el responsable de mantener un modelo económico dependiente, sostenido en una estructura agraria tradicional y concentrada, que explicaba el estancamiento del país y el Estado corrompido e ineficaz. El batllismo había tenido la oportunidad histórica de modernizar la economía transformando la estructura agraria, pero no se había animado. Desde el Congreso del Pueblo, en 1965, hasta las 30 medidas de gobierno del FA, en 1971, se construyó un modelo alternativo, que pretendía superar al modelo batllista por medio de la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior y la banca, y una enérgica acción industrial del Estado.

El 26 de marzo de 1971, el general Liber Seregni, en el discurso inaugural del FA, decía que este movimiento pretendía ser la superación del intento batllista industrialista y del intento agropecuario ensayado por los blancos, ya que las “dos vías tomadas no enfrentaron el obstáculo decisivo para el desarrollo nacional, y ese obstáculo es la oligarquía, es decir, la trenza bancaria terrateniente y de intermediación exportadora, el grupo social que domina y acapara la tierra, el crédito, los canales de comercialización de nuestros productos. Sus centros de poder siguieron intactos, determinando nuestra economía, estrangulando al país, beneficiándose de las energías de nuestro pueblo, apropiándose y desviando el esfuerzo nacional”.

Luego vino la dictadura, y en ese contexto los valores democráticos del batllismo comenzaron a ser revalorizados. Aquella experiencia fuertemente criticada en los 60 renació en las cenizas de la dictadura como un imaginario aspiracional del que, de diversas maneras, los actores políticos preponderantes intentaron apropiarse. Pero fue entre los 90 y el nuevo siglo cuando esto pareció consolidarse para el FA. La crisis ideológica de la izquierda en la pos Guerra Fría tendió a barrer los planteos igualitaristas vinculados con las ideas socialistas. En un contexto de ofensiva neoliberal, las propuestas desarrollistas que sobrevivieron hasta los 80, que reclamaban transformaciones estructurales, fueron sustituidas por una estrategia defensiva que proponía defender lo que aún quedaba de aquel modelo batllista. En el contexto de los intentos privatizadores, ya no se trataba de proponer una nueva economía estatal que superara aquel modelo, que antes se consideró agotado, sino de defender los restos de este.

Esto no sólo ocurrió aquí. También en Brasil y Argentina las izquierdas se reconciliaron con los pasados reformistas o populistas de los 50, que venían cuestionando desde los 60. En Argentina, quienes venían de la izquierda pero-

nista y algunos de la izquierda de los 60 revalorizaron la tradición estatista desarrollista del peronismo. En Brasil, la moderación del Partido de los Trabajadores se acercó a la experiencia nacional popular del varguismo. En el contexto del avance neoliberal, la “nueva izquierda”, que venía de los 60, se reconcilió con la vieja política popular latinoamericana, con todos sus problemas y virtudes. En Uruguay, frases de Mujica como “tragarse los sapos” o “abrazarse con culebras” resumen dicho espíritu reconciliatorio.

La estrategia tuvo sus virtudes. Amplió las bases populares de los partidos de izquierda, lo que permitió históricas victorias electorales. Asimismo, redujo las desconfianzas de ciertas elites económicas y políticas. En contextos económicos de crecimiento, dichos gobiernos hicieron redistribuciones sociales de una manera que seguramente gobiernos de otras tradiciones ideológicas no habrían hecho. Sin embargo, en el contexto uruguayo, con una situación económica adversa, la identidad batllista no parece ser una buena opción para pensar el futuro. Luego de varios años de crecimiento, nos estamos acercando a una situación que tiene similitudes con la que enfrentó el batllismo en los 30 o en los 50 y los 60, cuando la dependencia de los mercados externos limitó la posibilidad de redistribuir el ingreso. Fue justamente en esos contextos en los que el batllismo mostró sus principales debilidades; algunos de sus sectores optaron por una reacción conservadora, y la izquierda cuestionó la imposibilidad de radicalizar su modelo. Es por eso que, desde una perspectiva de izquierda, la reivindicación del fenómeno batllista tiene sus límites. Si el FA se define como el batllismo del siglo XXI, también tendríamos que preguntarnos cuáles serán nuestros Terras y Pachecos, que, al fin y al cabo, fueron el resultado inevitable de proyectos reformistas que se quedaron en el camino. ■